

Santiago, once de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En esta causa RUC N° 2000630320-0 y RIT N° 869-2023 del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Antofagasta, en sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro se resolvió que:

I.- Se absuelve a Nazira Milenka Calderón Rojas y Wilfredo Ricardo Velásquez Pizarro, de la imputación por el delito de asociación ilícita formulada en su contra por el ministerio público.

II.- Se absuelve a Jenny Noemí Naranjo Vega de la imputación por el delito de tráfico de estupefacientes, cometido el 11 de septiembre de 2021, formulada en su contra por el ministerio público.

III.- Se absuelve a Carolina Alejandra Varas Catalán de la imputación por el delito de tráfico de estupefacientes, cometido el 31 de marzo de 2022, formulada en su contra por el ministerio público.

IV.- Se absuelve a Yeritza Noemí Velásquez Naranjo y Wilfredo Ricardo Velásquez Pizarro de la imputación por el delito de lavado de activos, formulada en su contra por el ministerio público.

V.- Se condena a Jenny Noemí Naranjo Vega y a Denisse Gioconda González Sepúlveda a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autoras del delito de asociación ilícita del artículo 16 letra a) de la Ley N° 20.000, perpetrado en la ciudad de Calama, entre el segundo semestre de 2019 hasta el 8 de abril de 2022.



VI.- Se condena a Nicole Gissel Velásquez Naranjo, Sergio Fabián Quispe Arellano y Manuel Antonio Almonte Cortés a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autores del delito de asociación ilícita del artículo 16 letra b) de la Ley N° 20.000, perpetrado en la ciudad de Calama entre el segundo semestre de 2019 y el 11 de septiembre de 2021 para Velásquez y el 8 de abril de 2022, para los otros condenados.

VII.- Se condena a Mauricio Andrés Núñez Araya y Ricardo Mario Velásquez Naranjo a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autores del delito de asociación ilícita del artículo 16 letra b) de la Ley N° 20.000, perpetrado en la ciudad de Calama, entre el segundo semestre de 2019 y el 8 de abril de 2022.

VIII.- Se condena a Carolina Alejandra Varas Catalán y Roberto Fernando Concha Miranda a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autores del delito de asociación ilícita del artículo 16 letra b) de la Ley N° 20.000, perpetrado en la ciudad de Calama, entre el segundo semestre de 2019 hasta el 8 de abril de 2022.

IX.- Se condena a Pablo César Varas García a la pena de dos años y ciento



ochenta días de presidio menor en su grado medio, más las penas accesorias de suspensión para cargos u oficios públicos mientras dure la condena, en su calidad de autor del delito de asociación ilícita del artículo 16 letra b) de la Ley N° 20.000, perpetrado en la ciudad de Calama, entre el segundo semestre de 2019 hasta el 8 de abril de 2022.

X.- Se condena a Yeritza Noemí Velásquez Naranjo a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de inhabilitación para cargos u oficios públicos mientras dure la condena, en su calidad de cómplice del delito de asociación ilícita del artículo 16 letra b) de la Ley N° 20.000, perpetrado en la ciudad de Calama, entre el segundo semestre de 2019 hasta el 8 de abril de 2022.

XI.- Se condena a Jenny Noemí Naranjo Vega y Denisse Gioconda González Sepúlveda a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, multa de ochenta unidades tributarias mensuales, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autoras y coautoras, en su caso, del delito reiterado de tráfico de drogas, perpetrados en la ciudad de Calama los días 22 de noviembre de 2021, 31 de enero de 2022 y 08 de abril de 2022.

XII.- Se condena a Nicole Gissel Velásquez Naranjo, Mauricio Andrés Núñez Araya y Nazira Milenka Calderón Rojas a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de cuarenta unidades tributarias mensuales, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para



cargos u oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autores de un delito de tráfico de drogas, perpetrado en la comuna de Antofagasta, el día 11 de septiembre de 2021.

XIII.- Se condena a Wilfredo Ricardo Velásquez Pizarro, Ricardo Mario Velásquez Naranjo, y Sergio Fabián Quispe Arellano a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de cuarenta unidades tributarias mensuales, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autores de un delito de tráfico de drogas, perpetrado en la comuna de Calama, el día 08 de abril de 2022.

XIV.- Se condena a Manuel Antonio Almonte Cortés a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, multa de ochenta unidades tributarias mensuales, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autor de un delito de tráfico de drogas, perpetrado en la comuna de Calama, el día 22 de noviembre de 2021.

XV.- Se condena a Pablo César Varas García a la pena de dos años y ciento ochenta días de presidio menor en su grado medio, multa de diez unidades tributarias mensuales, más las penas accesorias de suspensión para cargos u oficios públicos mientras dure la condena, en su calidad de autor de un delito de tráfico de drogas, perpetrado en la comuna de Calama, el día 22 de noviembre de



2021.

XVI.- Se condena a Denisse Gioconda González Sepúlveda y Manuel Antonio Almonte Cortés a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de doscientas unidades tributarias mensuales más las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autores del delito de lavado de activos, perpetrado en la ciudad de Calama, entre el segundo semestre de 2019 y el 8 de abril de 2022.

XVII.- Se condena a Jenny Noemí Naranjo Vega, Nicole Gissel Velásquez Naranjo, y Sergio Fabián Quispe Arellano a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de doscientas unidades tributarias mensuales, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autores del delito de lavado de activos, perpetrado en la ciudad de Calama, entre el segundo semestre de 2019 y el 11 de septiembre de 2021 para Velásquez y el 8 de abril de 2022 para los otros condenados.

XIX.- Se concede a los condenados Pablo Varas García y Yeritza Velásquez Naranjo, la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.

Contra este veredicto las defensas de los acusados Nazira Calderón Rojas, Carolina Varas Catalán, Yeritza Velásquez Naranjo, Ricardo Velásquez Naranjo, Nicole Velásquez Naranjo, Jenny Naranjo Vega, Wilfredo Velásquez Pizarro, Sergio Quispe Arellano, Denisse González Sepúlveda, Manuel Almonte Cortés y



Mauricio Núñez Araya interpusieron recursos de nulidad, los que se estimaron admisibles por este tribunal, y que se conocieron en la audiencia pública de veintidós de agosto pasado, como da cuenta el acta que se levantó con la misma fecha.

Y considerando:

1º) Que el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de las imputados Nazira Calderón Rojas y Carolina Varas Catalán, se funda en la causal consagrada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal.

Esgrime que el tribunal rechazó la configuración de la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, consagrada en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, respecto de Calderón Rojas, pero incurrió en una contradicción al desechar la circunstancia atenuante, como también omitió las razones legales o doctrinales para desestimarla.

En cuanto a Varas Catalán, los sentenciadores aplican erradamente el artículo 16 de la Ley N° 20.000, al indicar que su conducta consistía en realizar ventas en los domicilios allanados y que, por eso constituía una “piloto” de la asociación, y por tanto pertenecía a la misma, sin hacerse cargo de las declaraciones prestadas por testigos que señalaron que desconocía la existencia de la asociación.

Concluye solicitando se acoja el recurso, se anule la sentencia y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, condenando a Nazira Calderón a una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, con pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva; y se absuelva a Carolina Varas de la imputación que se le hiciera como autora del delito de asociación ilícita, por no darse los



presupuestos del tipo penal respecto de ella.

2º) Que el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Yeritza Velasquez Naranjo esgrime como causal principal la establecida en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, fundado en que la investigación policial y fiscal se origina en una diligencia policial llevada a cabo sin que existiesen indicios de la comisión de un delito y sin que fuese precedida por una instrucción general o particular impartida por la Fiscalía competente, en orden a practicarla.

Explica que los funcionarios policiales, conforme a lo expresado por ellos, en la madrugada del 19 de junio de 2020, fiscalizaron a un extranjero que había cruzado la frontera por paso no habilitado, quien fue puesto por el Ministerio Público a disposición de la autoridad migratoria por no haber indicios de la comisión de un delito.

Sin embargo, con ocasión de esta detención, el jefe de OS7 de Carabineros ordena un rastreo en las inmediaciones de la localidad de Chiu Chiu, logrando incautar un teléfono celular que se encontraba en un sitio eriazo, hallando en él números telefónicos que habrían permitido descubrir a los imputados.

Indica que esas diligencias investigativas fueron desarrolladas de manera autónoma por parte de Carabineros de Chile, transgrediendo con ello las limitaciones de actuación que le impone nuestra legislación, haciendo con ello ilegal tanto el levantamiento de evidencia, como todas las diligencias probatorias desarrolladas como consecuencia de dicha actuación.

Luego, invoca como primera causal subsidiaria, la contemplada en el artículo 374 letra e) en relación al artículo 342 letra c), ambos del Código Procesal



Penal, por cuanto la sentencia no se hace cargo de manera cabal y completa de toda la prueba rendida en el juicio, ni tampoco efectúa una valoración completa de ella, en especial, la conclusión que atribuye participación de Yeritza Velasquez Naranjo en el delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas, ni menos expone los elementos en los que la funda.

Expresa que los registros de las interceptaciones telefónicas no son suficientes para dar por acreditada su calidad de cómplice en el delito de asociación ilícita, pues solo dan cuenta del aviso de unas actuaciones policiales a su hermana, y las restantes son confusas en cuanto a la persona a las que se refieren, por lo que se vulneró el principio de razón suficiente.

Como segunda causal subsidiaria invoca el artículo 373 letra b), en relación el artículo 385, ambos del Código Procesal Penal, pues el tribunal se negó a aplicar la excusa legal absolutoria o causal de inexigibilidad de otra conducta, prevista en la parte final del artículo 17 del Código Penal, pues da por acreditado como conducta atribuida a Yeritza Velasquez Naranjo el dar aviso a su hermana que estaban allanado los inmuebles donde se encontraban los supuestos puntos de venta, pero esa conducta no constituye un hecho encaminado a la consecución del fin criminal que toda asociación debe presentar, precisando que en este caso la advertencia es coetánea o posterior a una entrada y registro llevada a efecto por los funcionarios policiales, por lo que no resulta ser simultáneo a la ejecución de un delito de asociación ilícita, sino posterior a la ejecución de un delito concreto de tráfico.

Por otra parte, el tribunal omite la hipótesis de encubrimiento prevista en el ordinal cuarto del artículo 17 del Código Penal, en especial la hipótesis de que



pudiendo representarse la actividad del autor, pero sin noción concreta del hecho punible de que se trate en todos sus contornos, como exige la autoría y la complicidad, le suministre auxilios o noticias para que se guarden, precaven o salven.

Por ello, pide se anule el juicio y la sentencia condenatoria dictada, solo en relación con el hecho por el cual ha sido condenada, en el caso de los dos primeros motivos y se ordene la realización de un nuevo juicio oral por tribunal no inhabilitado, determinando el estado en que debe quedar el procedimiento, o solo de la sentencia, dictando en tal evento sentencia de reemplazo por la que se absuelva a su representada.

3°) Que la defensa de Ricardo Velásquez Naranjo en su recurso de nulidad esgrime como causal principal la contemplada en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, que subdivide en dos capítulos.

El primero se refiere a la incorporación de medios de prueba producto de actividades autónomas de investigación, realizadas por funcionarios policiales, que consistieron en rastrear un sector cercano a la localidad de Chiu Chiu, encontrando un teléfono celular, en los términos descritos en el arbitrio de nulidad impetrado por la acusada Yeritza Noemí Velásquez Naranjo.

El segundo capítulo se funda en que el coimputado Paulo Cesar Varas, quien acudió a la Policía portando droga, presta declaración sin la presencia de un fiscal, sin que además haya sido informado oportunamente de sus derechos y sin contar con la asistencia de un abogado, y al que no se le detiene, confiriéndole la calidad de informante, la que posteriormente se retira, obteniendo información inculpatória respecto de los restantes acusados.



En subsidio, invoca la causal del artículo 374 letra e) en relación 342 letra c), ambas del Código Procesal Penal, puesto que se omitió la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, así como la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones.

Explica que la sentencia consigna algunos razonamientos en los que pretende fundar su decisión, pero no abarca toda la prueba rendida ni tampoco efectúa una valoración comparativa que permita superar los vacíos en el razonamiento de condena del imputado respecto de los dos ilícitos que se le atribuye.

Concluye, solicitando se anule el juicio y la sentencia condenatoria dictada y se ordene la realización de un nuevo juicio oral por tribunal no inhabilitado al efecto determinando el estado en que debe quedar el procedimiento.

4º) Que, en lo referente al arbitrio de nulidad interpuesto por Nicole Velásquez Naranjo, se funda de manera principal en artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, la que subdivide en tres capítulos.

El primero de los acápites se refiere a la agregación de pruebas producto de actividades autónomas de investigación realizadas por funcionarios policiales, que no fueron autorizadas ni dispuestas por el Ministerio Público, ya explicados en los motivos que anteceden.

El segundo capítulo se cimenta en la concurrencia de Paulo César Varas a dependencias de OS7 de Carabineros de Calama, portando una importante cantidad de droga, quien presta declaración sin la presencia de un fiscal, sin que se le proporcione información sobre los derechos que le asisten y sin presencia de



un abogado defensor, también explicado en el basamento que antecede.

Una tercera sección se refiere a la infracción del principio de pasividad y mínima intervención de los juzgadores, así como de las reglas de interrogatorio a testigos y peritos, puesto que durante la declaración del perito contable señor Raasch, el presidente del tribunal antes que terminase su declaración libre, interviene y le recuerda que ha olvidado señalar las acciones que ha desplegado en relación con la imputada, exigiéndole que declare sobre aquella, vulnerando las limitaciones que establece el legislador en relación con los principios de pasividad y mínima intervención.

Indica que el artículo 329 inciso segundo establece de modo perentorio que el interrogatorio es efectuado por las partes, con lo que se priva al tribunal de la facultad de efectuar preguntas durante la declaración directa o del contraexamen y en el caso de los peritos durante su exposición libre, que no puede ser interrumpida ni por los intervinientes ni por el tribunal.

En subsidio, invoca la causal del artículo 374 letra e) en relación 342 letra c), ambas del Código Procesal Penal, pues la sentencia solo en apariencia pareciera estar fundamentada, sin embargo, no se hace cargo de manera cabal y completa de toda la prueba rendida en el juicio, ni tampoco efectúa una valoración completa de todos y cada uno de los medios de prueba incorporados al juicio, especialmente en lo que dice relación a los delitos de asociación ilícita y de lavado de activos.

Precisa que la sentencia omite señalar las actividades concretas que habría realizado la imputada para la asociación ilícita, ni cuándo o a quien le dio instrucciones, ni como las mismas lograban conseguir el fin criminal propuesto por



la asociación.

Agrega que lo mismo acontece con el delito de lavado de activos, puesto que el tribunal omite hacerse cargo de dos circunstancias, la primera respecto a exponer el elemento que le permitió llegar a la conclusión de que los fondos que presume habidos del tráfico son tales, considerando que la imputada tiene iniciación de actividades, como tampoco señala los medios de prueba que le permite concluir que las acciones desplegadas, es decir, comprar bienes y servicios con dineros cuyo origen no está justificado, sea lavado de activo.

Por ello, pide se anule el juicio y la sentencia condenatoria dictada y se ordene la realización de un nuevo juicio oral por tribunal no inhabilitado al efecto, determinando el estado en que debe quedar el procedimiento.

5°) Que la defensa de Jenny Naranjo Vega interpuso como causal principal de su arbitrio la contemplada en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, que divide en dos capítulos.

El primer acápite consiste en agregar pruebas producto de actividades autónomas de investigación realizadas por funcionarios policiales, no autorizadas ni dispuestas por parte del Ministerio Público, que culminaron en la incautación de un teléfono celular, la que fue explicada en los fundamentos que anteceden.

El segundo apartado se refiere a la declaración de Paulo César Varas, prestada en dependencias de OS7 de Carabineros de Calama, en los mismos términos que lo expuesto en los arbitrios de nulidad que anteceden.

En subsidio, invoca el artículo 374 letra e) en relación 342 letra c), ambos del Código Procesal Penal, por cuanto la sentencia recurrida en apariencia pareciera estar fundamentada, sin embargo no se hace cargo de manera cabal y



completa de toda la prueba rendida en el juicio, ni tampoco efectúa una valoración completa de todos los medios de prueba incorporados, ni señala el modo que con ellos puede establecer que efectivamente la acusada fuera autora de los delitos de asociación ilícita y en lavado de activos.

Finaliza solicitando se anule el juicio y la sentencia condenatoria dictada y se ordene la realización de un nuevo juicio oral por tribunal no inhabilitado al efecto, determinando el estado en que debe quedar el procedimiento.

6°) Que, en cuanto al recurso de nulidad de Wilfredo Ricardo Velásquez Pizarro, la causal principal se funda en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, al originarse la investigación policial y fiscal en una diligencia efectuada por funcionarios policiales de manera autónoma, sin que existiesen indicios de la comisión de un delito y sin que fuese precedida por una instrucción general o particular impartida por la Fiscalía competente, como ya se expresó en los recursos que anteceden.

En subsidio, esgrime la causal contemplada en el artículo 374 letra e) en relación 342 letra c), ambas del Código Procesal Penal, la que se configura porque la sentencia aparentemente se encuentra fundada, pues no se hizo cargo de los medios de prueba rendidos en el juicio oral, como tampoco de qué manera se establece la participación de Wilfredo Velásquez en el delito de tráfico de drogas.

Explica que el tribunal no alcanzó convicción respecto de participación de su representado en el delito de asociación ilícita, pero al dar por establecido el hecho punible señala que la posesión de la droga es parte de la ejecución de las acciones de la asociación ilícita a la que “pertenecían” y que en cuanto al dolo había que enmarcarlo en la realización de la finalidad criminal de la asociación,



pero el acusado es absuelto en la comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, limitándose los sentenciadores para fundar su decisión de condena a acudir a los razonamientos que se refiere a esos ilícitos.

Agrega que en este caso no se ha señalado de qué modo concreto a su respecto se verifican los requisitos fácticos y normativos para condenarle a título de autor directo, conforme el artículo 15 N° 1 del Código Penal, más si se considera que la droga respecto de la que se atribuye posesión al imputado no se encontraba en su poder, puesto que la misma fue descubierta en una cartera de mujer que se encontraba en el comedor del domicilio donde, transitoriamente se encontraba, la que no fue fijada en el lugar donde se levantó.

Agrega que, en cuanto el aserto policial y fiscal de que el imputado habría reconocido su propiedad sobre la droga, como fundamento de la participación atribuida se estrella con variadas dificultades. La primera es la transgresión de los diversos deberes y limitaciones que el legislador ha impuesto a las policías en su actuación.

También señala que existe una vulneración de las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, pues se estableció que el imputado no es partícipe de la asociación criminal, es una persona a la época con un consumo problemático de pasta base y el contenedor de la droga no fue habido materialmente en su poder, lo que provoca que cualquier conclusión a las que el tribunal arribe, obviando los supuestos anteriores como premisas de su razonamiento resultan ser falaces por vulnerar las reglas de la lógica, en especial el principio de no contradicción.

Termina pidiendo se anule el juicio y la sentencia condenatoria dictada y



se ordene la realización de un nuevo juicio oral por tribunal no inhabilitado al efecto y determinando el estado en que debe quedar el procedimiento, juicio que deberá versar solo del hecho respecto del cual fue condenado.

7º) Que la defensa de Sergio Quispe Arellano deduce recurso de nulidad fundado de manera principal en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, la que también subdivide en dos capítulos.

El primero se funda en que se agregaron pruebas producto de actividades autónomas de investigación no autorizadas ni dispuestas por parte del Ministerio Público, lo que ya fue explicado en los basamentos que preceden.

El segundo acápite se funda en la declaración de Paulo Cesar Varas prestada ante Carabineros, también explicados en los arbitrios anteriores.

De manera subsidiaria, esgrime la causal subsidiaria del artículo 374 letra e) en relación con el artículo 342 letra c), ambos del Código Procesal Penal, por cuanto, a su juicio, la sentencia solo en apariencia se encuentra fundada, atendido que no se hace cargo de toda la prueba rendida en el juicio ni tampoco efectúa una valoración completa de cada uno de los medios de prueba incorporados al juicio, pues no ha señalado de qué modo puede establecer que efectivamente el imputado haya incurrido en una asociación ilícita y en lavado de activos.

Expresa que el tribunal le atribuyó la actividad de reabastecer de drogas a los dos inmuebles destinados exclusivamente para la venta de la sustancia ilícita de la asociación y, posteriormente, se encargaba de retirar de dichos domicilios el dinero recaudado con la venta de la droga, como también ejecutar las instrucciones directas de las líderes de la organización, Jenny Naranjo Vega y Dennise González Sepúlveda, como también cumplía labores realizando la guarda



de cantidades indeterminadas de drogas en su inmueble y tomando contacto con los proveedores de drogas, con el objeto de conseguir sustancias ilícitas en mayores cantidades, para luego ser vendidas, conforme al modus operandi de funcionamiento de la asociación.

En relación con el delito de lavado de activos se le atribuye la adquisición de motocicletas y otras especies y la recepción de abonos de dinero, pero sin acreditar el origen de los dineros.

En virtud de lo expresado, pide se anule el juicio y la sentencia condenatoria dictada y se ordene la realización de un nuevo juicio oral por tribunal no inhabilitado, determinando el estado en que debe quedar el procedimiento.

8°) Que la defensa de Denisse Gonzalez Sepúlveda, también funda la causal principal de su recurso en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, que subdivide en tres capítulos.

El primer y tercer acápite se refieren respectivamente, a la diligencia policial autónoma que dio inicio a la investigación consistente en el rastreo de un sector aledaño a la localidad de Chiu Chiu e incautación de un teléfono celular, por una parte y a la declaración prestada por el coacusado Pablo César Varas García, el día 22 de noviembre del año 2021, en las dependencias de funcionarios de la Sección del OS-7, de El Loa Calama, sin presencia de un fiscal y de un abogado defensor, por otra, explicados en los basamentos que anteceden.

El segundo capítulo se sustenta en la forma de registrar materialmente las transcripciones de las interceptaciones telefónicas de todos y cada uno de los acusados, pues el artículo 223 del Código Procesal Penal señala en su inciso 2° que en el evento de que el Ministerio Público dispusiere la transcripción escrita de



la grabación, esta deberá hacerse por un funcionario que actuará en la transcripción, no como funcionario, sino en calidad de ministro de fe acerca de la fidelidad de aquella.

Sin embargo, las transcripciones obtenidas e incorporadas al juicio oral no aparecen suscritas y/o refrendadas por persona alguna en calidad de ministro de fe, por lo que la ausencia de esta formalidad procesal afecta indefectiblemente el valor probatorio de ellas, las que constituyen prueba directa de corroboración de la testimonial de cargo y en la cual la sentencia fundamenta su decisión de condena.

Concluye, solicitando se anule el juicio y la sentencia condenatoria dictada y se ordene la realización de un nuevo juicio oral por tribunal no inhabilitado al efecto y determinando el estado en que debe quedar el procedimiento.

En subsidio, esgrime la causal del artículo 374 letra e), en relación con los artículos 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal, por cuanto la sentencia no se hace cargo de toda la prueba rendida en el juicio, ni tampoco efectúa una valoración completa de todos los medios de prueba incorporados al juicio, especialmente no establece de manera razonable como concluye la participación de Denisse González Sepúlveda en los cinco delitos por los que se le condena y tampoco funda ni expone, en consecuencia, los elementos para atribuirle la autoría del artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Termina pidiendo se anule el juicio y la sentencia condenatoria y se ordene la realización de un nuevo juicio oral por tribunal no inhabilitado, determinando el estado en que debe quedar el procedimiento.

9°) Que, el arbitrio de nulidad de Manuel Antonio Almonte Cortés invoca como causal principal el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, que



también subdivide en tres subcapítulos.

El primero se funda en una diligencia policial autónoma efectuada por los funcionarios policiales sin encontrarse en las hipótesis descritas por el legislador. El segundo en la forma de registrar materialmente las transcripciones de las interceptaciones telefónicas practicadas en la presente causa y, por último, la declaración prestada por el coacusado Pablo César Varas García en dependencias de la Sección del OS-7, de Carabineros de El Loa Calama, a los cuales se hizo referencia en los arbitrios anteriores.

Por ello, solicita se anule el juicio y la sentencia condenatoria dictada en contra de su defendido y se ordene la realización de un nuevo juicio oral por tribunal no inhabilitado, determinando el estado en que debe quedar el procedimiento.

Como causal subsidiaria invoca la contemplada en el artículo 374 letra e) en relación con los artículos 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal, por cuanto la sentencia aparentemente se encuentra fundada, pero no se hace cargo en forma completa de la prueba rendida en el juicio, ni tampoco explica de forma cabal la manera en que atribuye la autoría de Manuel Almonte Cortes en los tres delitos por los que se le condena.

Expresa que el tribunal vulnera los principios de la identidad, de la no contradicción y de la razón suficiente, pues no analiza particularmente los medios de prueba en que funda la condena del acusado.

Finaliza pidiendo se anule el juicio y la sentencia condenatoria y se ordene la realización de un nuevo juicio oral por tribunal no inhabilitado al efecto y determinando el estado en que debe quedar el procedimiento.



10°) Que la causal del arbitrio de nulidad impetrado por la defensa de Mauricio Andrés Nuñez Araya se funda en el artículo 374 letra e) en relación con los artículos 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal.

Señala que la infracción se produce, en primer término, al violentar el principio lógico de razón suficiente, al realizar una fundamentación aparente al momento de analizar la convergencia anímica como presupuesto de la asociación ilícita, pese a encontrarse el imputado en la ciudad de La Serena, como también al realizar una fundamentación aparente al momento de descartar las alegaciones de proposición de tráfico en el hecho II.

Expresa que para configurar el delito de asociación ilícita se requiere, además, que se acreditara una convergencia anímica, una suerte de affectio societatis, una conciencia de pertenecer a una asociación ilícita, lo que no acontece, dado que se trataba de un grupo de personas que realizaban ventas de drogas, en donde cada una de ellas eran fungibles, reemplazables por otra persona, lo que se plasmaba en la circunstancia de que esta supuesta asociación habría seguido operando sin problemas, incluso después de la detención de Nicole Velásquez a propósito del hecho II.

De lo razonado por el tribunal se aprecia que se alude al sentido de pertenencia a propósito de palabras frecuentes que se escucharon en las reproducciones de escuchas telefónicas a lo largo del juicio oral, pretendiendo que se trataban de palabras claves de esta asociación ilícita.

No obstante, nuevamente existe una fundamentación aparente, dado que hacen referencias a palabras propias de la jerga del narcotráfico, dado que las máximas de la experiencia nos indica que términos como piloto, roca o matar, en



el contexto de esas llamadas claramente hacen alusión a la venta de drogas.

Aclarado lo anterior, entonces queda en evidencia la fundamentación aparente, por cuanto no es posible advertir el razonamiento por el cual el tribunal eleva esta jerga al rango de lenguaje propio de la sociedad, no explican de qué forma esto es exclusivo de este grupo ni mucho menos cómo esto constituye una forma de comunicación propia de esta supuesta asociación ilícita.

Respecto a una fundamentación aparente al momento de analizar la participación de Núñez Araya en los planes de la asociación ilícita, pese a encontrarse en la ciudad de La Serena, es contradictoria, pues por una parte los sentenciadores sostienen que el acusado Núñez participa en la asociación, incluso cuando estaba radicado en La Serena, pero posteriormente absuelven a la acusada Naranjo Vega de la imputación que se le hizo como autora del hecho II, porque sostuvieron que no se acreditó que en él efectivamente fuera parte integrante de la asociación ilícita, estimándose que se trata de un hecho inconexo.

Con todo, es necesario recordar que la acusada Calderón también fue acusada por asociación ilícita y este hecho II, pero finalmente resultó absuelta del primero, precisamente porque se estimó que se trataba de un hecho inconexo de la asociación.

No se hacen cargo los sentenciadores de fundamentar respecto de cuáles fueron las conductas que el acusado Núñez efectivamente realizó en la ciudad de La Serena en beneficio de la asociación.

Por otra parte, dentro de los hechos asentados se señala que su función en la asociación ilícita era la de servir como piloto, pero tampoco precisan ni razonan cómo es que pudo desempeñarse como piloto de la asociación en la



venta de drogas en Calama, si se encontraba en la Cuarta Región.

En cuanto a la fundamentación aparente al momento de descartar las alegaciones de proposición de tráfico en el hecho II, atendido que la conducta imputada al acusado Núñez Araya no era punible por tratarse de una hipótesis de proposición de tráfico, porque de las escuchas telefónicas se estableció que la adquisición y guarda de la droga fue realizada exclusivamente por las acusadas Velásquez y Calderón en la comuna de Calama, también se estableció de esas escuchas que el acusado Núñez Araya se encontraba en la comuna de La Serena hace ya tiempo (no determinado en el fallo), como también que la contribución de Núñez Araya se daría al recibirlas en La Serena cuando Velásquez y Calderón llegaran. Además, no se acreditó que Núñez Araya contribuyera de forma alguna a la adquisición de la droga, ni como financista, no de ninguna otra forma.

Por ello, afirma que se trata de una invitación a participar en un tráfico, participación que se daría sí y sólo sí las acusadas Velásquez y Calderón llegaban con la droga a La Serena, y el acusado Núñez cooperaría recibéndolas; que la intervención del acusado Núñez aún no se verificaba al momento de la detención de las acusadas Velásquez y Calderón.

Expresa que un análisis pormenorizado de la cuestión debatida por la defensa lleva a concluir que no se trata de un acto preparatorio propiamente tal y por tanto es irrelevante la consumación del delito objeto de la oferta.

Concluye solicitando se invalide la sentencia, se declare nula la sentencia pronunciada, y nulo también el juicio oral en que recayó, reponiéndose el proceso al estado en que deba realizarse un nuevo juicio por jueces no inhabilitados del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta.



11º) Que de conformidad al artículo 359 del Código Procesal Penal, para acreditar las circunstancias constitutivas de las causales fundadas en el artículo 373 letra a), las defensas de Nicole Velásquez Naranjo, Manuel Almonte Cortés y Denisse González Sepúlveda incorporaron como prueba pasajes de los registros de audio de declaraciones prestadas por testigos y peritos durante la realización del juicio oral.

12º) Que los hechos que la sentencia impugnada tuvo por acreditados en el motivo quincuagésimo quinto de la sentencia son los siguientes:

“HECHO N°1: ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA EL TRÁFICO DE DROGAS.

Desde, a lo menos, el segundo semestre del año 2019 y hasta la fecha de sus detenciones, respectivamente, los acusados actuaron de manera organizada en el seno de una estructura jerárquica, en la cual, cada uno de ellos cumplió funciones determinadas, dedicándose de manera sistemática y permanente al tráfico ilícito de pasta base de cocaína. Esta asociación, cuyo fin es la comisión de delitos de tráfico de drogas, tuvo como líderes o centro de poder a las imputadas JENNY NOEMÍ NARANJO VEGA y DENISSE GIOCONDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA, siendo integrada por los acusados RICARDO MARIO VELÁSQUEZ NARANJO, MANUEL ANTONIO ALMONTE CORTÉS, SERGIO FABIÁN QUISPE ARELLANO, ROBERTO FERNANDO CONCHA MIRANDA, NICOLE GISSEL VELÁSQUEZ NARANJO, CAROLINA ALEJANDRA VARAS CATALÁN, MAURICIO ANDRÉS NÚÑEZ ARAYA, PABLO CESAR VARAS GARCÍA y YERITZA NOEMI VELÁSQUEZ NARANJO.

En atención a la investigación policial se determinó que las líderes de la organización se encargaban de contactar a los proveedores de droga, de repartirla



entre sus mandos medios y en general de tomar todas las decisiones importantes que atañen al funcionamiento de la organización. Una vez con la droga en su poder, los otros miembros de la organización procuraban la venta ininterrumpida en los domicilios ubicados en Calle Alejandro Rodríguez N° 2825 y N° 2829 de la comuna de Calama.

La venta de droga se realizó a través de los denominados “pilotos” quienes se encargaban de la distribución directa de la droga al público, los cuales iban siendo intercambiados conforme al plan criminal y las directrices de sus líderes, con el objetivo de que se cumpliera de forma permanente la finalidad de la organización, esto es, la guarda y comercialización de drogas.

Durante su vigencia la asociación además de la venta se encargaba del acopio y guarda de la droga en diversos domicilios.

La sustancia ilícita guardada era pesada y dosificada en papelillos y era trasladada en bolsas plásticas o cajas, para su venta. Esta droga se trasladaba desde estos lugares de acopio a los domicilios de venta de droga que se realizaba en turnos ininterrumpidos, los que debían ser cumplidos mediante horarios por parte de los miembros de la organización, que eran establecidos conforme a las instrucciones de las líderes de la organización. Todo lo anterior, con el objeto de que a través de este modus operandi, organizado y más difícil de detectar, se pudiera cumplir de manera permanente y sin ser descubiertos en toda su orgánica, tanto el funcionamiento de la organización y sus fines, mediante la distribución de funciones.

Los acusados, ya individualizados, en específico, realizaban las siguientes funciones al interior de la organización:



1.- JENNY NOEMI NARANJO VEGA: Colíder de esta organización criminal, entrega instrucciones a sus hijos y a otros miembros de la organización respecto de la venta de drogas, recauda los dineros, les pide cuenta a otros miembros de la organización y se encarga de otros aspectos logísticos necesarios para el funcionamiento de la organización; tiene contacto con los proveedores de la droga de la organización.

2.- DENNISE GIOCONDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA: Colíder de esta organización criminal, se encarga de organizar y coordinar los turnos de venta de drogas en las mencionadas dos casas de venta y sus inmediaciones, así como la guarda de drogas en los domicilios; controlando la cantidad de droga vendida y el dinero recaudado, minimizando las pérdidas; les pide cuenta a otros miembros sobre las ventas realizadas, el dinero recaudado y otros aspectos logísticos necesarios para el funcionamiento de la organización, en contacto directo con NARANJO VEGA.

3.- SERGIO FABIÁN QUISPE ARELLANO: Es un mando medio en la organización, tenía como función reabastecer de drogas a los dos inmuebles destinados exclusivamente para la venta de la sustancia ilícita de la asociación; además se encargaba de retirar de dichos domicilios el dinero recaudado. Recibía y ejecutaba las instrucciones directas de las líderes de la organización, JENNY NARANJO VEGA y DENNISE GONZÁLEZ SEPÚLVEDA.

4.- NICOLE GISSEL VELASQUEZ NARANJO: Constituye un mando medio en la organización ya que recibe alertas y entrega instrucciones, se encarga de la administración económica de la organización, cumpliendo funciones en la recaudación y conteo del dinero producto de la venta de drogas, realizado en las



casas de venta ya mencionadas; también realiza funciones de dosificación de la droga.

5.- MANUEL ANTONIO ALMONTE CORTÉS: Mando medio en la organización, dicho imputado recibe cantidades indeterminadas de droga y dinero de parte de las líderes y proveedores de la organización, para entregarla a los distribuidores. Además, recibe el dinero que se obtiene a partir de la venta de droga realizada en las casas de venta de la organización; presta labores de protección y seguridad en la agrupación.

6.- RICARDO MARIO VELASQUEZ NARANJO: Su rol corresponde al de un mando medio en la organización. Se dedica a la dosificación de la droga que luego es trasladada hasta los domicilios de venta de droga para su comercialización y también, a su vez, se dedicaba a una forma particular de venta de drogas, esto es, a pedido mediante llamados telefónicos, ejecutando en este rol labores de repartidor o “delivery” de droga.

7.- ROBERTO FERNANDO CONCHA MIRANDA: Se encarga de la guarda en su inmueble, ubicado en calle Los Canelos 3934, Calama, de cantidades indeterminadas de dinero conforme al modus operandi de la asociación de venta por turnos, con el objeto de mantener limitadas cantidades de dinero en efectivo en dichos lugares.

Asimismo, en algunas ocasiones vende drogas y en otras se dedica a reparar los inmuebles que en diversas ocasiones presentaban daños en su estructura producto de los diversos allanamientos.

8.- MAURICIO ANDRES NUÑEZ ARAYA: Apodado el “TRUCHA”, su función fue la de vendedor de droga de la asociación, fundamentalmente de pasta



base de cocaína, esto es desempeñarse como “piloto” en los domicilios ubicados en Alejandro Rodríguez N°2825 y N°2829, Calama.

9.- CAROLINA ALEJANDRA VARAS CATALÁN: Es parte de la organización y su función es la de haber sido una de las principales vendedoras de droga de la asociación, en los domicilios ubicados en calle Alejandro Rodríguez N°2825 y N°2829, el producto de la venta de las drogas lo debía rendir a las líderes y mandos medios de la organización, dicha función la ejerce desde los inicios del funcionamiento de la organización criminal y hasta la fecha en que se produjo la detención de la mayor parte de los acusados, esto es en abril del año 2022.

10.- PABLO VARAS GARCIA: Es miembro de la organización y sus funciones en ésta consistían en realizar reparaciones a los inmuebles ubicados en Alejandro Rodríguez N°2825 y N°2829, Calama, por el encargo de los líderes de esta y mandos medios; también se dedicaba a transportar droga hasta los inmuebles donde se efectuaba la venta de la droga a los consumidores; vendía droga de la asociación en los ya referidos inmuebles de calle Alejandro Rodríguez; el producto de la venta de la droga lo debía rendir a las líderes y mandos medios de la organización, debiendo llevar las recaudaciones a los domicilios de las líderes, entre ellos, a la parcela que ocupaban los acusados Manuel Almonte Cortés y Denisse González Sepúlveda; inmueble que se encontraba a la época, ubicado en calle Santa María Parcela N°18, Calama.

11.- YERITZA NOEMI VELÁSQUEZ NARANJO: Que con pleno conocimiento de las actividades ilícitas que desarrolla la misma, prestó apoyo y colaboración en las actividades de esta, efectuando en un día determinado dos



llamados telefónicos a su hermana NICOLE VELÁSQUEZ NARANJO, dando aviso de la presencia policial cerca de las casas de avenida Alejandro Rodríguez; y trasladando, en una ocasión, “cajas”, correspondientes a contenedores del dinero producto de las ventas de droga.

Durante el periodo de investigación a esta organización, señalado al inicio de estos hechos, se estableció la venta de drogas en esos domicilios; así: CAROLINA ALEJANDRA VARAS CATALAN y GENESIS TORRES RODRIGUEZ, fueron detenidas el día 14 de enero de 2020, en el inmueble ubicado en Alejandro Rodríguez 2825, Calama, con un recipiente con 44 envoltorios y dos bolsas cada una con 100 envoltorios, haciendo la totalidad de 244 envoltorios de pasta base de cocaína, con un peso de 38.75 gramos.

YILBER OMAR FLORES MONDACA: fue detenido el día 03 de marzo de 2022, en el inmueble ubicado en Alejandro Rodríguez 2829, Calama, momentos en que guardaba 15 envoltorios de papel color blanco con pasta base con un peso de 6 gramos y en el interior del inmueble, dentro del inodoro la cantidad de 128 envoltorios que arrojaron un peso de 107 gramos de pasta base de cocaína.

Además, se incautó dinero proveniente de la venta de droga en cantidad de \$58.700. Con fecha 18 de marzo 2022, también fue detenido en el domicilio de Alejandro Rodríguez 2825, Calama, puesto que guardaba 2 envoltorios de pasta base. Además, al interior del domicilio guardaba 8 envoltorios y una bolsa con 94 envoltorios de pasta base. Asimismo, sobre el piso se encontraron 140 envoltorios más, todos de pasta base, dando una totalidad de 244 envoltorios que arrojaron un peso de 117.86 gramos. Se encontró dinero proveniente de la venta de la droga, por un total de \$99.000.



ALDO RODRIGO GONZALEZ AVENDAÑO, RICARDO ANDRÉS ARROUCH PIZARRO y GABRIEL IGNACIO VARAS NAVARRO, fueron detenidos el día 22 de marzo de 2022, en el domicilio de Alejandro Rodríguez 2825, Calama, en ese contexto González Avendaño guardaba 391 envoltorios de pasta base de cocaína con un peso de 83,73 gramos de cocaína base; Arrouch Pizarro guardaba entre sus vestimentas 110 envoltorios que arrojaron 18,44 gramos de pasta base de cocaína y Varas Navarro mantenía en su poder dinero producto de las ventas de la droga por un total de \$345.000.

JONATAN FERNANDO MUÑOZ SÁNCHEZ Y FRANCISCO GIOVANNI ÁLVAREZ GONZÁLEZ, fueron detenidos el día 29 de julio del 2020 en el domicilio de Alejandro Rodríguez 2825, Calama; cuando guardaban en 16 envoltorios con un peso de 6 gramos de pasta base de cocaína. Además, se les encontró \$67.000 en dinero en efectivo, producto de las ventas de la droga.

VICTOR MANUEL TORRES RIASCO Y FRANCISCO GIOVANNI ÁLVAREZ GONZALEZ, fueron detenidos el día 29 de septiembre del 2020, en el domicilio ubicado en Alejandro Rodríguez entre el 2821 y 2829, Calama, donde guardaban al interior 3 bolsas de nylon transparente contenedores de 331 envoltorios de papel blanco cuadriculados, todos contenedores de pasta base de cocaína, con un peso total de 140 gramos bruto. Además, se incautaron al costado de las bolsas de nylon, la suma de \$46.000 pesos producto de la venta de la droga, y en poder del imputado Álvarez la suma de \$24.000 producto de la venta de la droga.

MAURICIO ANDRÉS NÚÑEZ ARAYA y SEBASTIÁN ANDRÉS ARRIAGADA MONARDES, fueron detenidos el día 08 de enero de 2021 en el



domicilio ubicado en Alejandro Rodríguez 2821, dado que, mantenían una bolsa, la cual contenía 170 envoltorios de papel en cuyo interior había pasta base con un peso de 66 gramos. También, mantenían \$194.000 en dinero en efectivo, producto de la venta de droga. Asimismo, se incautó al interior, una bolsa con 54 envoltorios contenedores de pasta base en su interior, con un peso de 21 gramos.

CRISTIAN IGNACIO ARAYA ROJAS, fue detenido el día 25 agosto 2021, en el inmueble ubicado en Alejandro Rodríguez 2829, dado que, se le incautó 45 envoltorios contenedores de pasta base de cocaína con un peso de 17.28 gramos. Además, se le incautó la suma de \$130.650 en dinero en efectivo, producto de la venta de la droga.

SAÚL ANDRÉS VALIENTE PÉREZ, fue detenido el día 29 de septiembre de 2021 en el domicilio de Alejandro Rodríguez 2829, momento en que guardaba 57 envoltorios de papel contenedores de pasta base con un peso de 20.75 gramos. Además, se incautó la suma de \$92.000 producto de la venta de la droga.

Asimismo, PABLO CESAR VARAS GARCÍA Y YILBER OMAR FLORES MONDACA, fueron detenidos el día 26 de enero de 2022, en el domicilio ubicado en Alejandro Rodríguez 2831, en tal procedimiento se incautó, droga que guardaban, correspondiente a 58 envoltorios de papel con pasta base de cocaína con un peso de 24.55 gramos bruto. Además, en el suelo, 18 envoltorios con un peso bruto de 7.55 gramos y debajo de una mesa otro papelillo con un peso de 0.39 gramos.

HECHO N° 2: TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS.

Los imputados NICOLE GISSEL VELASQUEZ NARANJO, NAZIRA MILENKA CALDERON ROJAS y MAURICIO ANDRÉS NUÑEZ ARAYA, entre los



días 20 de agosto de 2021 y 10 de septiembre de 2021, se encontraban coordinando una operación específica consistente en la adquisición de una cantidad indeterminada de droga para posteriormente transportarla el día 10 de septiembre de 2021 hacia la comuna de La Serena. Dicha operación estaba al mando de NICOLE GISSEL VELÁSQUEZ NARANJO y MAURICIO ANDRÉS NUÑEZ ARAYA, quienes acordaron el día en el cual se realizaría el traslado, el medio de transporte que se utilizaría, el financiamiento del viaje y las personas que participarían en esta operación, siendo también, parte de este acuerdo, la imputada NAZIRA MILENKA CALDERON ROJAS, quien se encargaría de transportar la droga a la ciudad de La Serena, lugar en que sería recibida por el imputado MAURICIO ANDRÉS NUÑEZ ARAYA. Fue así como a las 21:00 horas del día 10 de septiembre de 2021, que funcionarios policiales de OS7 de carabineros, se instalaron en el interior del terminal de buses ubicado en Avenida Granaderos Nro. 2963, Calama con la finalidad de realizar vigilancia discreta detectando la llegada de NAZIRA MILENKA CALDERÓN ROJAS que se acercó y subió al bus interurbano placa patente única LJKW-61. Luego a las 21:43, llegó NICOLE GISELLE VELÁSQUEZ NARANJO, quien ingresó al bus que se retiró ingresando a la ruta B-25 en dirección hacia Antofagasta.

Más tarde, aproximadamente las 00:20 horas del día 11 de septiembre de 2021 funcionarios de la Sección O.S.7 El Loa, fiscalizaron al bus, en la Ruta 5 norte a la altura del kilómetro 1399, específicamente en la plaza de peaje de la provincia de Antofagasta. Siendo las 00:21 horas, en el segundo piso del mencionado bus, donde una funcionaria de OS7 guía de perros policiales, con el ejemplar canino "FUSY", realizó una búsqueda olfativa por el pasillo y los



diferentes asientos, donde la can detectora de drogas comenzó a dar alerta positiva en una mochila de color gris/negro marca Head ante la presencia de alguna droga, la cual se encontraba entre medio de los pies de NAZIRA MILENKA CALDERÓN ROJAS, quien se encontraba sentada en el asiento Nro. 41 del bus. A un costado de ella, específicamente en el asiento Nro. 42, se encontraba sentada la imputada, NICOLE GISELLE VELÁSQUEZ NARANJO, debido a la alerta entregada por el can detector de drogas y los antecedentes registrados en intervenciones telefónicas, se les solicitó descender del bus. Ante tal indicio se procedió a realizarles un control de identidad, durante el cual, el personal policial encontró e incautó desde el interior de la mochila que portaba entre sus piernas NAZIRA CALDERON ROJAS, 02 (DOS) paquetes rectangulares envueltos en papel de color plateado, contenedores de Pasta Base de Cocaína, sustancia que era transportada por las imputadas para ser entregadas en la ciudad de La Serena al acusado MAURICIO ANDRÉS NUÑEZ ARAYA, quien se encontraba a la espera de la llegada de la droga. Conforme a lo anterior y con la evidencia señalada anteriormente, se procedió a la detención de NAZIRA CALDERON ROJAS y en tanto, NICOLE GISELLE VELÁSQUEZ NARANJO, fue detenida momentos después por orden judicial. Las imputadas transportaban 02 (DOS) PAQUETES RECTANGULARES ENVUELTOS EN PAPEL DE COLOR PLATEADO contenedores de 2 KILOS 550 GRAMOS DE PASTA BASE DE COCAÍNA.

En dicho procedimiento se les incautaron a las imputadas las siguientes especies:

En primer lugar, A LA IMPUTADA NAZIRA MILENKA CALDERON ROJAS:



- 01 (UNA) MOCHILA DE COLOR NEGRO /GRIS MARCA HEAD,
- 01 (UN) CELULAR MARCA SAMSUNG MODELO A20 COLOR AZUL
- 01 (UN) PASAJE DE BUS DE LA EMPRESA PULLMANS BUS NRO. RDCO13116, ASIENTO 41 y \$5.000 (CINCO MIL PESOS) EN DINERO EFECTIVO.

ESPECIES INCAUTADAS A LA IMPUTADA NICOLE GISSEL VELASQUEZ NARANJO:

- 01 (UN) TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG COLOR CELESTE, debidamente Intervenido.

- 01 (UN) TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG COLOR GRIS,
- 01 (UN) PASAJE DE BUS DE LA EMPRESA PULLMANS BUS NRO. RDCO13117, ASIENTO 42 y la suma de \$266.000 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS) en dinero efectivo.

Conviene señalar que, con los hechos antes descritos, todos los acusados pretendían inducir, promover o facilitar el uso o consumo de las sustancias ilícitas que transportaban.

HECHO N° 3: TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

El día 8 de abril del año 2022, a partir de las 05:00 horas aproximadamente, en cumplimiento de diversas órdenes de detención, de entrada, registro e incautación, se ingresó a los domicilios de los miembros de la organización liderada por NARANJO VEGA Y GONZÁLEZ SEPÚLVEDA a aquellos que la misma utilizaba para el cumplimiento de sus fines, conforme a los siguiente:



Domicilio ubicado en CALLE HUGO VIDAL ZAMORANO NRO. 2574, CALAMA, donde al interior se encontró a los acusados JENNY NOEMÍ NARANJO VEGA, WILFREDO RICARDO VELÁSQUEZ PIZARRO y RICARDO MARIO VELÁSQUEZ NARANJO, quienes tenían y guardaban al interior de una cartera color negro, 1046 envoltorios contenedores de 491 gramos de pasta base de cocaína distribuidos en 8 bolsas de nylon transparentes, al interior de una bolsa verde de material sintético. Asimismo, se incautó desde dicho domicilio:

- 01 pesa digital marca Philco color gris/azul.*
- 01 pesa digital sin marca de color gris.*
- 01 licuadora marca Valory color blanco.*
- 01 colador metálico con mando de madera.*
- 01bolsa de material sintético de color verde.*
- 01 cartera de color negro marca Esika.*
- 08 bolsas de nylon transparentes*

Sumado a lo anterior, se incautó a la imputada Jenny Naranjo Vega, 01 (UN) celular marca Motorola color azul y una bolsa de material sintético de color naranja contenedora de \$1.505.000- pesos, dinero proveniente de venta de drogas. Por otra parte, en poder de Ricardo Velásquez Naranjo, se incautó 01 (UN) celular marca Samsung color blanco.

En el inmueble UBICADO EN CALLE COLONIA N° 3457, CALAMA, el personal policial que hizo ingreso a dicho domicilio encontró al interior de éste al imputado, SERGIO FABIÁN QUISPE ARELLANO, quien tenía y guardaba al interior de una mochila color negro marca Nike 03 bolsas de nylon transparente las cuales, contenían en su interior 39 envoltorios de papel cuadriculado



contenedoras de 25 gramos y 800 miligramos de pasta base de Cocaína. Asimismo, se le incautó desde el interior de un velador 02 pesas digitales color gris sin marca ni modelo y 01 pesa digital marca Diamond color gris y la suma de 1.205.000 pesos, producto de la venta de la droga, además, se incautaron 04 teléfonos celulares de diferentes marcas.

Hecho N° 4: TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

El día 22 de noviembre de 2021 alrededor de las 09.30 horas se presentó en dependencias de La sección OS7 El Loa, el imputado PABLO CESAR VARAS GARCÍA quien hizo entrega de 640 envoltorios de papel blanco cuadriculado, contenedores de pasta base de cocaína, con un peso bruto de 246 gramos, droga que el imputado tenía y guardaba para su comercialización en las casas de venta de la organización ubicadas en Alejandro Rodríguez N° 2825 y N° 2829, Calama.

Conviene hacer presente que días previos, específicamente, entre los días 17 y 19 de noviembre del año 2021, el imputado PABLO CESAR VARAS GARCÍA, recibió directamente el encargo por parte de las líderes de la organización, las imputadas DENISSE GIOCONDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA y JENNY NOEMÍ NARANJO VEGA, junto a un mando medio, el imputado MANUEL ANTONIO ALMONTE CORTES; de trasladar dicha droga.

Con posterioridad a estos hechos, el imputado continuó realizando actividades para el cumplimiento de los fines de la organización, esto es, fundamentalmente la venta directa de drogas en los ya mencionados domicilios de calle Alejandro Rodríguez, descrito precedentemente.



Con los hechos antes detallados, todos los acusados mencionados han inducido promovido o facilitado el uso o consumo de las sustancias ilícitas que comercializaban.

Hecho N°5: Tráfico ilícito de drogas.

Mediante técnicas especiales de la ley 20.000, el día 31 de marzo de 2022 a las 16.00 horas el agente revelador debidamente autorizado, AERD/C75/2021, concurrió al domicilio ubicado en Alejandro Rodríguez N° 2825, Calama, lugar donde fue atendido por una mujer quien, preguntó al agente “¿cuánto?”, señalando el revelador “uno”, haciendo la entrega de \$1.000 para, acto seguido, hacerle entrega de un envoltorio de papel blanco cuadriculado contenedor de 500 miligramos de pasta base de cocaína.

De la misma forma, mediante técnicas especiales de la ley 20.000, el día 31 de marzo de 2022 a las 18.00 horas el agente revelador debidamente autorizado, AERD/C75/2021, concurrió al domicilio ubicado en Alejandro Rodríguez N° 2829, Calama, lugar donde fue atendido por una mujer, quien preguntó ¿cuántos?, señalando el agente revelador “uno”, haciendo entrega de \$1000 pesos, para, acto seguido hacer la mujer entrega de un envoltorio de papel blanco cuadriculado contenedor de 500 miligramos de pasta base de cocaína.

Nuevamente, el mismo día 31 de marzo a las 19.00 horas, se instaló una vigilancia discreta hacia el domicilio de Alejandro Rodríguez N° 2825, Calama, lugar donde se aproximó un sujeto masculino de contextura delgada, realizando un intercambio de dinero por dosis de droga, procediendo un funcionario de OS7 El Loa a fiscalizar a dicho sujeto en Alejandro Rodríguez esquina Guatemala comuna de Calama; siendo individualizado con las siglas MACD, a quien, se le



incautó 1 envoltorio de papel blanco cuadriculado contenedor de 500 miligramos de pasta base de cocaína.

Conforme al funcionamiento de la organización antes descrita, la venta de drogas se realizaba en esos domicilios por encargo y bajo las instrucciones de DENISSE GIOCONDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA y JENNY NOEMÍ NARANJO VEGA, siendo los productos de las ventas de la droga repartidos entre ellas.

HECHO N°6: LAVADO DE ACTIVOS.

Los acusados, JENNY NOEMÍ NARANJO VEGA, DENISSE GIOCONDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA, SERGIO FABIÁN QUISPE ARELLANO, MANUEL ANTONIO ALMONTE CORTÉS y NICOLE GISSEL VELÁSQUEZ NARANJO, a lo menos, desde el segundo semestre del año 2019 y, a sabiendas que el dinero y los bienes provienen directa o indirectamente del desarrollo de actividades de tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, ocultaron o disimularon estos bienes y/o el origen ilícito de los mismos.

Asimismo, adquirieron, poseyeron, tuvieron o usaron dichos bienes, con ánimo de lucro, habiendo conocido su origen ilícito al momento de recibirlos.

Las actividades realizadas por los acusados que constituyen diversas operaciones del delito de lavado de activo, pudiéndose identificar las siguientes tipologías, todas ellas contenidas en el “Informe de tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile” de la Unidad de Análisis Financiero, publicado el año 2022:

1.- DENISSE GIOCONDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA:

I. Adquisición de bienes

Gastos en comercio:



En el curso de la investigación se logró determinar que la imputada realizó operaciones en efectivo y tarjetas de débito en diversas casas comerciales por aproximadamente \$3.473.032.- en tiendas relacionadas con CENCOSUD y aproximadamente \$5.601.828.- en tiendas relacionadas con Falabella, lo que da un total de \$9.074.860.-

Por otra parte, según información extraída de las cartolas y cuentas bancarias, la imputada realizó compras en diversos locales comerciales por la suma de \$5.668.509.-. Además, la imputada realizó giros desde su propia cuenta en cajeros y cajas por la suma de \$15.591.000.-

II. Utilización de cuentas/Fraccionamiento o “Pitufeo”:

La imputada, realizaba y recibía depósitos en dinero en efectivo a través de sus cuentas bancarias y efectuaba transacciones en dinero que no se condicen con su real capacidad económica. En efecto, durante el periodo investigado la imputada recibió abonos en su cuenta vista N°2170181207 del Banco Estado por la suma de \$22.935.177.-, de los cuales \$10.486.000.- fueron en dinero en efectivo. Por otra parte, se realizaron cargos o giros por la suma de \$21.650.458.-

Junto con lo anterior, se determinó que la referida imputada declaró ante el Servicio de Impuestos Internos, como actividad o giro económico la “compra, venta y alquiler de inmuebles”, con el objeto de dar una apariencia lícita a los ingresos obtenidos a través de los delitos base. Declarando ingresos mensuales durante los años 2020 y 2021 por aproximadamente \$1.980.000.-, y durante el año 2022, por aproximadamente \$2.475.000.- Declarando una base imponible anual, para el año comercial 2020 de \$23.760.000.-, sin embargo, dicho año no se emitieron boletas de venta; para el año 2021 declaró ingresos por



aproximadamente - \$22.770.000.-, sin embargo, en ese periodo solo se emitieron boletas por la suma de \$7.920.000.-; y para el año 2022, se declaró una base imponible de \$22.275.000, no obstante, sólo se emitieron boletas de venta por \$4.620.000.-.

De igual forma, la imputada declaró ante el Servicio de Impuestos Interno como “Retiros Actividad Empresarial” la suma de \$10.200.000.- El año tributario 2020; \$10.000.000.- el año tributario 2021; y \$10.000.000.- el año tributario 2022., Sin embargo, no se lograron obtener registros contables ni financieros sobre los supuestos retiros.

2.- JENNY NOEMI NARANJO VEGA:

I. Adquisición de bienes:

Gastos en comercio:

La imputada realizó operaciones en efectivo y tarjetas de débito en diversas casas comerciales por aproximadamente \$2.034.242-, en tiendas relacionadas con CENCOSUD, y \$2.339.544-, en tiendas relacionadas con Falabella. Lo que da un total de \$4.373.786.-

Por otra parte, según información extraída de las cartolas y cuentas bancarias, la imputada realizó compras en diversos locales comerciales por la suma de \$10.137.322-. Además, la imputada realizó giros desde su propia cuenta en cajeros y cajas por la suma de \$24.908.300.-

II. Utilización de cuentas/Fraccionamiento o “Pitufeo”:

Durante el periodo investigado la imputada recibió abonos en su cuenta vista N°2170128608 del Banco Estado, por la suma de \$41.135.654.-, de los cuales \$11.477.800.- fueron en dinero en efectivo. Por otra parte, se realizaron



cargos o giros por la suma de \$41.138.541.-. Además, se debe señalar que se desconoce el origen del dinero obtenido a través de transferencias bancarias y depósitos en efectivo por la suma que asciende a \$35.366.400.-

Con todo, durante su detención se le incautó la suma de \$1.505.000.- en dinero en efectivo.

Conviene señalar que, no se conoce ninguna fuente lícita que permita justificar las sumas y los montos antes señalados.

3.- MANUEL ANTONIO ALMONTE CORTÉS:

I. Utilización de cuentas/Fraccionamiento o "Pitufeo":

En el curso de la investigación, se logró determinar que el imputado realizó y recibió depósitos en dinero en efectivo a través de sus cuentas bancarias y efectuó transacciones en dinero que no se condicen con su real capacidad económica. En efecto, recibió abonos por \$15.736.996.- en su cuenta vista N°02170180928 del Banco Estado, de los cuales \$10.422.750.- fueron depositados en dinero en efectivo. Por otra parte, se realizaron cargos o giros por la suma de \$15.678.189.-

Además, en la cuenta N° 5190085750 del Banco Santander, recibió depósitos en efectivo por la suma de \$7.500.000.- desconociéndose también la fuente lícita para justificar los dineros y transacciones antes referidos.

4.- SERGIO FABIAN QUISPE ARELLANO:

I. Adquisición de bienes:

Vehículos:

a) Con fecha 08 de septiembre de 2020, el imputado adquirió la moto PPU LZV.55, marca Yamaha, modelo YZF R15, año 2020, por el monto de \$2.840.000.



b) Con fecha 20 de febrero de 2021, el imputado adquirió la moto PPU SRW.73, marca Yamaha, modelo YZF R15, año 2021, por el monto de \$3.260.000.

Compra en comercio:

En el curso de la investigación se logró determinar que el imputado realizó operaciones en efectivo y tarjetas de débito en tiendas relacionadas con Falabella por aproximadamente \$816.130.-

II. Utilización de cuentas/Fraccionamiento o “Pitufeo”:

Durante el periodo investigado el imputado recibió abonos en su cuenta vista N°01770098684, del Banco Estado, por la suma de \$16.500.471.-, de los cuales \$8.494.200- fueron en dinero en efectivo. Por otra parte, se realizaron cargos o giros por la suma de \$16.459.198.-

Entre los abonos recibidos, se encuentran depósitos y transferencias realizadas por diversos integrantes de la asociación, los cuales tiene como único ingreso las ganancias obtenidas de las ventas de droga entre los cuales se encuentra la imputada Jenny Naranjo Vega, quien es líder de la asociación. De esta manera, el imputado ha realizado diversas transferencias a miembros de la asociación, entre los cuales se encuentra la imputada Jenny Naranjo Vega, Ricardo Velásquez Naranjo, Carolina Varas Catalán y Nicole Velásquez Naranjo.

5.- NICOLE GISSEL VELÁSQUEZ NARANJO

I. Adquisición de bienes:

Compra en comercio:



La imputada realizó operaciones en efectivo y tarjetas de débito en diversas casas comerciales por aproximadamente \$446.688.- en tiendas relacionadas con CENCOSUD, \$157.540.- en tiendas relacionadas con Falabella.

II. Utilización de cuentas/Fraccionamiento o “Pitufeo”:

En efecto, durante el periodo investigado la imputada recibió abonos en su cuenta vista N°021-7-062386-2 del Banco Estado por la suma de \$12.526.618. Por otra parte, realizó cargos o giros por la suma de \$12.524.317.-. Además, la imputada recibió depósitos en efectivo por la suma de \$6.847.000.-

Entre los abonos recibidos se encuentran depósitos y transferencias realizadas por diversos integrantes de la asociación los cuales tiene como único ingreso las ganancias obtenidas de las ventas de droga. De la misma manera la imputada ha realizado diversas transferencias a miembros de la asociación, entre los cuales se encuentra la imputada Jenny Naranjo Vega, quien es líder de la asociación, Ricardo Velásquez Naranjo, Mauricio Núñez Araya, y Yeritza Noemí Velásquez Naranjo”.

Estos hechos fueron calificados como los delitos consumados de asociación ilícita, sancionado en el artículo 16 de la Ley N° 20.000, tráfico de sustancias estupefacientes, descrito en los artículos 3 en relación al 1 de la misma ley y lavado de activos, previsto y castigado en el artículo 27 letras a) y b) de la Ley N° 19.913.

13°) Que en relación a la causal esgrimida en el recurso interpuesto por la defensa de Nazira Calderón Rojas, baste señalar que, como ha resuelto uniformemente esta Corte en cuanto a las denuncias de infracción del artículo 11 N° 9 del Código Penal, en relación al artículo 373 letra b) del Código Procesal



Penal, ponderar y dictaminar si la colaboración prestada por el acusado puede o no calificarse de sustancial para el esclarecimiento de los hechos investigados, es una decisión privativa de los jueces de la instancia, ya que sólo ellos pueden sopesar si la actividad desarrollada por el inculcado a lo largo del procedimiento, a la luz del cúmulo de evidencia reunida en el mismo, contribuyó o no a la labor jurisdiccional de esclarecimiento de los acontecimientos enjuiciados, labor que no puede desarrollarse en esta sede de nulidad, pues implicaría una nueva apreciación y valoración de todos los elementos que llevaron a los jueces de la instancia a la conclusión discutida por el recurso (entre otras, SCS N°s 24.887-2014, de 29 de diciembre de 2014; 37.024-2015, de 10 de marzo de 2016; y, 16.919-2018, de 13 de septiembre de 2018). No es posible, por ello, analizar mediante este arbitrio eventuales inadvertencias sobre la concurrencia de la minorante en comento, motivo por el cual esta causal será desestimada.

14°) Que, en lo que se refiere a la causal de invalidación propuesta por la defensa de Varas Catalán, esto es, la prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal, por haber incurrido la sentencia en un error de derecho, al estimar que se configuraba el delito de asociación ilícita previsto en el artículo 16 de la Ley N° 20.000, es menester estarse a lo asentado por los jueces de la instancia al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea procedente que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, intente una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del fondo, desde que ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia.



Asentado lo anterior, se procederá al estudio de las protestas fundantes de esta causal del recurso, con arreglo a los hechos que en la decisión se tienen por demostrados.

15°) Que, de acuerdo con el mérito de los hechos que se tuvieron por acreditados en la sentencia impugnada, los que resultan inamovibles para este Tribunal atendida la causal de nulidad en estudio, permiten colegir que las alegaciones de la acusada Varas Catalán parten de un supuesto fáctico diverso de aquel que se estableció en la sentencia impugnada –al argumentar que no se acreditó que la imputada sabía de la existencia de la agrupación-, desde que expresamente se estableció como hecho por los sentenciadores del grado, según se lee en el fundamento décimo sexto de la sentencia que se revisa, que las acusadas Naranjo Vega y González Sepúlveda encabezaban la asociación, ocupando mandos medios los imputados Nicole Velázquez y Sergio Quispe; y como integrantes de la misma los acusados Ricardo Velázquez, Manuel Almonte, Mauricio Núñez, Pablo Varas, Roberto Concha, Carolina Varas y Yeritza Velásquez, todos los cuales tenían funciones diferenciadas en ella, por lo que establece que tenían conocimiento que se desempeñaban en una agrupación destinada a perpetrar el delito de tráfico, incluida Carolina Varas Catalán, conforme a los antecedentes que fueron vertidos en el juicio oral.

De esta manera, el error de derecho denunciado con relación al artículo 16 de la Ley N° 20.000, no puede prosperar.

16°) Que, en cuanto a la causal principal impetrada por las defensas de Yeritza Velásquez Naranjo, Ricardo Velásquez Naranjo, Nicole Velásquez Naranjo, Jenny Naranjo Vega, Wilfredo Velásquez Pizarro, Sergio Quispe



Arellano, Denisse González Sepúlveda y Manuel Almonte Cortés, prevista en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal, se advierte que los recursos denuncian la configuración de la hipótesis de nulidad en el agravio a la garantía constitucional del debido proceso, fundado en que los funcionarios policiales efectuaron diligencias autónomas, tales como rastrear un terreno en un sector cercano la comuna de Chiu Chiu e incautar un teléfono celular, sin que concurrieran los requisitos para ello, como tampoco hubiera alguna instrucción por parte del Ministerio Público para efectos de llevarlas a cabo.

Frente a esta alegación, el tribunal estableció que la alusión a la infracción al debido proceso efectuadas por las defensas, constituía una forma demasiado vaga e imprecisa para justificar alguna hipótesis de prueba ilícita, sin que se precisara la forma en que se produjo, así como las garantías afectadas y su trascendencia.

Los jueces también establecen que la incautación y registro de un teléfono celular, más que afectar el debido proceso, lo que hace es vulnerar la propiedad y la privacidad o intimidad del dueño del móvil, y por ello resulta necesario una autorización judicial previa con dicha finalidad.

Precisan que la actividad policial se funda en la detención de un extranjero que había ingresado irregularmente al país, decidiendo los funcionarios policiales revisar el lugar en la que se verificó, *“para encontrar posibles elementos relacionados con el denominado, en ese momento, “delito de ingreso clandestino”, en un horario mas adecuado para dicha finalidad; actividad autónoma desplegada según lo previsto expresamente, por el artículo 83 del código procesal penal”* (sic).

El fallo también establece que *“el teléfono fue encontrado en unos*



matorrales, como cualquier basura, de tal modo que el titular del derecho fundamental se desprendió de él voluntariamente, por lo que no puede alegar en un juicio una infracción a su derecho a la privacidad, o si bien se prefiere perdió toda expectativa de privacidad sobre el contenido del móvil; no obstante ello, el hallazgo fue comunicado a la fiscalía especializada en focos criminales de la región, la que obtuvo la orden judicial respectiva, como así también obtuvo todas las autorizaciones jurisdiccionales para los diversos teléfonos de los acusados, interceptados en la presente causa.”

17°) Que, en lo concerniente a la infracción denunciada por los recursos de nulidad, cabe indicar que el debido proceso es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República y que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19, N° 3, inciso sexto, confiere al legislador la misión de definir las garantías de un procedimiento racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.

18°) Que, en otro orden de consideraciones, en cuanto a las facultades autónomas de actuación que la ley le entrega al personal policial, así como lo



referido al respeto del debido proceso y la intimidad, esta Corte Suprema ha señalado reiteradamente que la negativa a admitir prueba ilícita tiene como fundamento la concepción del proceso como instrumento de resolución jurisdiccional de litigios dentro del ordenamiento jurídico, lo que conduce a que todo acto que infrinja de manera sustancial dicho sistema debe ser excluido del mismo.

19°) Que, en relación con las normas de procedimiento aplicables al caso concreto, resulta necesario proceder a su análisis a efectos de poder determinar si ellas han sido transgredidas y, en su caso, examinar si dicho quebrantamiento ha significado la vulneración de los derechos fundamentales de los acusados, como denunciaron sus defensas.

20°) Que como se ha dicho en ocasiones anteriores por esta Corte, el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación.

Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (Sentencias Corte Suprema Roles N° 7178-17, de 13 de abril de 2017; N° 9167-17, de 27 de abril de 2017; N° 20286-18, de 01 de octubre de 2018; N° 28.126-18, de 13 de diciembre de 2018 y N° 13.881-19, de 25 de julio de 2019).

Es así como el artículo 83 del citado cuerpo normativo establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales permitiendo su gestión autónoma para prestar



auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b); resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación de rastros o vestigios del hecho, etcétera, (letra c); identificar testigos y consignar las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d); recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f).

Sólo en las condiciones que establece la letra c) recién citada, el legislador autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación.

A su vez, los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal regulan el procedimiento de control de identidad, estableciendo la facultad de los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona sin orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista algún indicio de que aquella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiese suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad; facultando para el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 – que describe lo que debe entenderse por situación de flagrancia- así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de aprehensión pendiente.



21°) Que las disposiciones recién expuestas tratan, entonces, de conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos, estableciéndose en forma general la actuación subordinada de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al órgano establecido por ley de la referida tarea, los que a su vez actúan conforme a un estatuto no menos regulado -y sometido a control jurisdiccional-en lo referido a las medidas que afecten los derechos constitucionalmente protegidos de los ciudadanos.

22°) Que, es conveniente precisar que de la sola lectura de los hechos que se dieron por establecidos soberanamente en la sentencia aparece de manifiesto que el actuar de los funcionarios de Carabineros se ajustó a derecho, toda vez que resulta perfectamente legítimo que, en el marco de una detención por ingreso irregular al país, que al momento de ocurrencia de los hechos era delito, rastrearan el sector con el objeto de verificar si existían evidencias de la comisión del ilícito y de incautar los objetos que encontraran, en este caso un teléfono celular que se encontraba abandonado en un sitio eriazo, lo que fue informado al Ministerio Público, conforme lo estableció la sentencia.

23°) Que, en consecuencia, al proceder del modo que lo hicieron los funcionarios policiales no transgredieron en el caso concreto las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no han vulnerado las normas legales que orientan el proceder policial como tampoco las garantías y derechos que el artículo 19° de la Constitución Política reconoce y garantiza a los imputados.

24°) Que, es necesario también destacar que, los reclamos descansan



únicamente en infracciones que las defensas observan respecto de las actuaciones, que habría afectado los derechos indicados respecto a terceros, esto es, a una persona no identificada que debió ser el dueño del teléfono incautado, quien, por tal circunstancia, no ha formulado reclamo alguno, por lo que este tribunal no logra visualizar su concreta y determinante repercusión en los derechos de los enjuiciados.

Así, por lo demás, lo ha resuelto esta Corte en los autos Rol N° 14.639-2015, por sentencia de fecha 04 de noviembre de 2015.

El recurso de nulidad, como todo medio de impugnación de resoluciones judiciales, exige la existencia de agravio, esto es, un perjuicio reparable en este caso sólo con la declaración de nulidad, el agravio cuya concurrencia exige el recurso de nulidad necesariamente tiene que afectar de manera directa al recurrente, en la especie, vulnerando las garantías constitucionales que alude. Dicho lo anterior, no es posible dar por afectados los derechos de los acusados, cuando quien tiene la titularidad y sí podría alegar alguna perturbación en tal sentido es un tercero, que ni siquiera está identificado.

25°) Que, así las cosas, al no haberse demostrado una infracción sustancial a una garantía fundamental de los acusados, la causal en análisis no podrán prosperar.

26°) Que en lo que concierne a la causal subsidiaria enarbolada por las defensas de Yeritza Velásquez, Ricardo Velásquez, Nicole Velásquez, Jenny Naranjo, Wilfredo Velasquez, Sergio Quispe, Denisse González, Manuel Almonte y Mauricio Núñez, esto es, de haberse vulnerado los límites de la sana crítica, como también haberse quebrantado los principios de la razón suficiente y de no



contradicción respecto a los delitos de asociación ilícita y tráfico de sustancias estupefacientes, basta decir que el artículo 297 del Código Procesal Penal ha dispuesto cómo deben darse por acreditados los hechos, entregando el legislador al tribunal de instancia la valoración con plena libertad, siendo su única limitación que no contradigan los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, por lo que pueden razonar apoyados en la prueba rendida y dando justificación en uno u otro sentido.

Constando que los medios de pruebas rendidos en el juicio oral fueron no sólo reproducidos sino sopesados al tenor de las alegaciones de los intervinientes y explicitando los juzgadores en sus razonamientos octavo en adelante, por qué les asignan mayor valor a determinadas pruebas que a otras, así como las que descartan, nada parece avalar alguna crítica de importancia al respecto en lo referente a los delitos de asociación ilícita y tráfico de sustancias estupefacientes.

En rigor, del tenor de los recursos se desprende claramente que lo que se intenta impugnar es la valoración que hizo el tribunal sobre cuya base fijó los hechos y las razones que llevaron a desestimar las propuestas de las defensas respecto de los delitos de asociación ilícita y tráfico de sustancias estupefacientes. De esta forma, lo que destaca en los libelos respectivos son presuntas insuficiencias o contradicciones, o apreciaciones distintas acerca de la gravitación de determinados medios de prueba, que surgirían de un análisis individual de las probanzas respecto de los dos delitos mencionados. Pero esas protestas sobre la apreciación de las pruebas, reservada a los jueces, son más propias de un recurso de apelación y carecen de la eficacia legal requerida para configurar una causal de nulidad como la intentada.



Cabe tener presente, asimismo, que la impugnación de la sentencia fundada en esta causal no dice relación con las conclusiones a que han arribado los sentenciadores al apreciar la prueba producida en el juicio oral respecto de los delitos de asociación ilícita y tráfico de sustancias estupefacientes, del momento que en ese aspecto gozan de libertad; con la limitación de que al valorarla no se aparten de los principios, máximas y conocimientos ya indicados, a fin de fundamentar debidamente el fallo para así controlar su razonabilidad. Sigue de ello que lo que sí es revisable por este medio de impugnación es la estructura racional del juicio o discurso valorativo sobre la prueba desde la perspectiva antes enunciada. En otras palabras, sólo es posible estimar el recurso por esta causal si el tribunal a-quo determina su convicción sobre la base criterios manifiestamente arbitrarios o aberrantes.

Por todo lo dicho, este acápite de los recursos en referencia serán denegados respecto de los delitos de asociación ilícita y tráfico de sustancias estupefacientes;

27°) Que en lo referente a la invocación de esta causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, invocadas de forma subsidiaria por las defensas de Denisse González, Manuel Almonte, Nicole Velásquez, Jenny Naranjo y Sergio Quispe, en cuanto resultaron condenados por el delito de lavado de activos, acontece una situación diferente, pues de la atenta lectura del fallo impugnado, resulta que los hechos que se tuvieron por acreditados no resultaron determinantes ni suficientes como para tener por establecida la comisión del citado delito respecto de los condenados recurrentes.

En efecto, en los motivos trigésimo séptimo, trigésimo octavo y trigésimo



noveno, el tribunal razona sobre la prueba aportada por la fiscalía, correspondiente a la declaración del perito Raasch y prueba documental referida a los movimientos tributarios, financieros y bancarios de los acusados, de los que concluye, respecto de cada uno, los ingresos que obtuvieron presumiblemente como consecuencia de las ganancias obtenidas por el delito de tráfico, y que gastaron, en el caso de Denisse González Sepúlveda, en tiendas relacionadas con Cencosud, por \$3.473.032.-, y en Falabella, por \$5.601.828.- De otra parte, y a su respecto, tampoco existe ningún antecedente que permita, con algún grado de certeza, establecer que la actividad de arriendo mensual de piezas que la condenada realizaba y cuyo giro había declarado ante el Servicio de Impuestos Internos, hubiera tenido por finalidad disimular los ingresos provenientes de la venta de drogas, pese a la informalidad con que esta actividad se verificaba.

En el caso del condenado Manuel Almonte Cortés, el fallo estableció que no realizó actividades remuneradas formales, y que pese a ello, mantuvo ingresos en su cuenta vista del Banco Estado por \$15.736.996.-, y por \$7.500.000.- en una cuenta en el Banco Santander, los que justificó en su declaración prestada en el juicio oral señalando que participaba activamente en el arriendo de piezas con la acusada González Sepúlveda; y el resto de ingresos con una herencia, sin haberlo acreditado. El tribunal concluye que estos ingresos provienen del tráfico de pasta base.

En cuanto a la condenada Jenny Naranjo, el tribunal tuvo por acreditado que no realizó ninguna actividad remunerada formal, y que pese a ello, tuvo ingresos en su cuenta bancaria por \$41.135.654.-, realizando giros por \$41.138.541.-, y habiendo efectuado compras en tiendas relacionadas con



Cencosud por \$2.034.242.-, con Falabella, por \$2.339.544.- y compras en otros locales comerciales por \$10.137.322.-, sin que se estableciera la fuente lícita de esos ingresos, por lo que se concluye que provienen de la actividad de tráfico de pasta base.

En relación con la condenada Nicole Velásquez Naranjo, pese a haberse establecido que no realizó actividades remuneradas formales, ni contar con una fuente lícita de sus ingresos, recibió abonos en su cuenta vista del Banco Estado por \$12.526.618.- y realizó giros por \$12.524.317.-, habiendo hecho compras por \$446.888.- en tiendas relacionadas con Cencosud y \$157.540.- en tiendas relacionadas con Falabella.

En cuanto al condenado Sergio Quispe Arellano, el fallo estableció que realizó una actividad remunerada formal en el 2020, y que adquirió dos motocicletas, por \$2.840.000.- y \$3.260.000.- respectivamente, que mantuvo ingreso en su cuenta vista del Banco Estado por \$16.500.471.- y realizó giros por \$16.459.198.-, realizando compras en tiendas relacionadas con Falabella por \$816.130.-, concluyendo el fallo que estos ingresos provienen de la actividad de tráfico de pasta base.

Agrega el tribunal que algunos acusados recibieron bonos entregados por el Estado y/o obtuvieron retiros de las A.F.P., ingresos que califica de marginales en relación con la situación patrimonial descrita para cada uno de ellos, y que no son suficientes para estimarlos como una fuente viable de ingresos; sino que se confunden con aquellos depositados en sus cuentas bancarias.

El tribunal considera respecto de los condenados que el hecho de ingresar dinero a cuentas bancarias no es una actividad que constituya un “efecto” del



delito de tráfico de drogas, sino una maniobra para ocultar su origen ilícito, afirmación que no puede compartirse, pues el depósito en una cuenta bancaria constituye únicamente una manera de poner a resguardo ese dinero.

En definitiva, los motivos trigésimo séptimo, trigésimo octavo y trigésimo noveno contienen únicamente inferencias desprovistas de elementos probatorios que le otorguen certeza y que permitan acreditar que, efectivamente, los condenados incurrieron en las conductas tipificadas en el artículo 27 letras a y b de la Ley 19.913.

A este respecto debe indicarse que la imputación y posterior condena no distingue si la conducta sancionada corresponde, respecto de cada uno de los sancionados, a aquella establecida en la letra a) o en la letra b) del artículo 27 de la Ley 19.913, existiendo únicamente una referencia al hecho del depósito efectuado por los condenados de las utilidades obtenidas de su actuar delictual en cuentas bancarias, acción que, como se indicó, no puede constituir la conducta penada en el literal a) que sanciona *“al que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de la perpetración de hechos constitutivos de algunos de los ilícitos contemplados en la ley N° 20.000 (...)”*, dado que el depósito en la cuenta bancaria, en particular si es a la vista, permite a su titular utilizar ese dinero cuando lo necesite, siendo por tanto una herramienta de administración del dinero, y no una que busque ocultar o disimular su origen.

Si lo sancionado es, en cambio, la conducta tipificada en la letra b) del artículo 27 de la Ley 19.913, que castiga al *“que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha*



conocido su origen ilícito”, debe dejarse asentado que los condenados por lavado de activos, Denisse González, Manuel Almonte, Jenny Naranjo, Nicoles Velásquez y Sergio Quispe, fueron condenados también en su calidad de autores y cómplice, en su caso, de los delitos de tráfico reiterado en el caso de algunas y tráfico de drogas en oportunidades específicas, respecto de los demás. El tribunal acreditó que los condenados practicaron hechos constitutivos del delito de tráfico, en particular, vendiendo directamente la droga o dando las órdenes para que ella fuese vendida, y acreditó también que, sin que haberse podido acreditar el origen de sus ingresos, los condenados hicieron depósitos y cargos en sus cuentas corrientes, y practicaron compras en establecimientos de comercio asociados a Cencosud y Falabella.

La letra b) no sanciona a quienes hayan realizado la actividad ilícita de tráfico, sino que está encaminada a castigar a terceros, que *“adquieran, posean, tengan o usen los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos han conocido su origen ilícito”*. La redacción sugiere, entonces, que el tercero – que no cometió el ilícito – usa esos bienes con ánimo de lucro, si al momento recibirlos, sabía de su origen ilícito. Lo anterior se refuerza con lo dispuesto en el inciso 4º de la norma, ya que sanciona a quien haya cometido alguna de las conductas descritas en las letras a) o b) sin conocer el origen de los bienes por negligencia inexcusable.

Por lo mismo, el inciso 5º de la norma se pone en la situación excepcional de que quien haya participado *“como autor o cómplice del hecho que originó tales bienes incurre, además, en la figura penal contemplada en este artículo, será sancionado...”*, norma que sólo puede hacer referencia a la letra a), como se



explicó.

En esta línea, la dogmática ha expresado que bajo esta hipótesis de la letra b) – del artículo 27 de la Ley 19.913 – el autor del delito previo o del “delincuente originario” nunca podrá ser imputado conforme a esta modalidad y solo podrá serlo bajo la variante de la letra a), toda vez que lo contrario implicaría sostener que por el solo hecho de cometer el delito precedente se estaría entrando en posesión o tenencia de los efectos del delito, generándose un concurso real entre el delito base y el delito de lavado, o bien, que en tal situación se produciría un concurso aparente de leyes o incluso un concurso ideal, desplazándose el delito de blanqueo y aplicar el delito precedente (“Delito de lavado de activos y deberes positivos”, Pablo Tomás Albertz Arévalo, Ediciones Der, Santiago, tercera edición, 2023, pág. 38).

Que, en términos argumentativos, la conclusión a la cual arriban los sentenciadores – de haber cometido los condenados el delito de lavado de activos - no descansa en premisas comprobadas y verdaderas, sino que solo se funda en inferencias y conjeturas, desprovistas de elementos de prueba; ni en una calificación jurídica que esté acorde con lo que se ha evidenciado precedentemente en torno a la dificultad de aplicar respecto de unos mismos hechos y de una misma persona, ambos literales del artículo 27 en estudio.

Lo anterior implica que el fallo carece de las razones suficientes para sustentar el delito de lavado de activos en los términos propuestos por el ente persecutor, faltando la necesaria corroboración de la tesis propuesta en la acusación. Por otra parte, se advierte un salto lógico en la cadena de inferencias en el razonamiento fáctico, pues aún en el caso de que se hubiere acreditado que



los dineros depositados en las cuentas corrientes de los condenados tienen origen ilícito, como lo sostiene la sentencia, no logra advertirse el ocultamiento del origen de dichos dineros, (letra a) o que se trate de terceros que los hayan usado sabiendo de su origen ilícito (letra b).

Que, conforme se ha venido razonando, la prueba rendida no resulta suficiente para tener por acreditado el ilícito de lavado de activos, siendo de cargo del ente persecutor aportar los antecedentes suficientes que permitan acreditar el ánimo de ocultamiento o disimulo del origen de los dineros, por lo que no es posible concluir de manera unívoca que los condenados tuvieron participación penal en el delito de lavado de activos, viéndose afectado el principio de razonabilidad o razón suficiente, al advertirse en el mismo una falta de fundamentación tendiente a explicar convincentemente el razonamiento que el sentenciador ha utilizado para concluir en el juicio de condena que se conoce, a partir de los diversos medios de prueba incorporados en la audiencia de juicio, más sin ejercer el control jurisdiccional y público a que está llamado respecto de la prueba rendida.

En estas circunstancias, la sentencia incumple la regla que previene los requisitos de las sentencias, y genera el motivo de nulidad de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en armonía con los artículos 297 y 342 letra c), del mismo cuerpo normativo, porque no ha sido extendida en la forma dispuesta por la ley, de manera que de por sí deviene el acogimiento de la causal en estudio respecto del delito de lavado de activos.

28°) Que en lo referente a la causal fundada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esgrimida en el arbitrio impetrado por la defensa de



Yeritza Velásquez, fundado en que el tribunal no aplicó el artículo 17 parte final del Código Penal, el fallo estableció que respecto de la acusada *“que con pleno conocimiento de las actividades ilícitas que desarrolla la misma, prestó apoyo y colaboración en las actividades de esta, efectuando en un día determinado dos llamados telefónicos a su hermana NICOLE VELÁSQUEZ NARANJO, dando aviso de la presencia policial cerca de las casas de avenida Alejandro Rodríguez; y trasladando, en una ocasión, “cajas”, correspondientes a contenedores del dinero producto de las ventas de droga”,* por lo que se estimó que la cooperación de la acusada ocurrió durante la ejecución del delito y no en forma posterior, siendo en consecuencia improcedente la aplicación de la norma referida.

29°) Que, conforme a lo señalado, la sentencia descartó que la participación de Yeritza Valásquez Naranjo hubiese sido posterior al hecho y en alguna de las hipótesis que contempla el artículo 17 del Código Penal, asentando que su participación fue simultánea y de colaboración a la perpetración del delito de asociación ilícita, por cuanto se acreditó que la imputada alertó en forma telefónica de procedimientos policiales que afectaban a la asociación y también trasladó cajas que contenían dineros obtenidos de la venta de droga, actividades realizadas durante el tiempo que se realizaban las transacciones ilícitas.

De acuerdo a los hechos fijados, los cuales resultan inamovibles para estos sentenciadores en virtud de la causal de invalidación propuesta, importa tener en cuenta que la complicidad se atribuye en el artículo 16 del Código Penal a quienes cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos, y no obedecen a las categorías de autoría previstas en el artículo 15 del mismo código; diferenciándose este grado de participación del encubrimiento debido a que este



último interviene con posterioridad a la ejecución del delito, con conocimiento de su perpetración.

30°) Que entonces, el correlato fáctico enunciado no cumple con los elementos exigidos por la ley para establecer que la participación de Yeritza Noemi Velásquez Naranjo fuese posterior a las actividades de venta de droga realizadas por la asociación y, por ende, resulta correcta la determinación de su participación como cómplice, razón por la cual será rechazada la causal en examen.

31°) Que en lo concerniente a la infracción del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, fundado en que los funcionarios policiales interrogaron a Pablo César Varas García en forma autónoma, sin advertirle sus derechos y en ausencia de su defensor, permitiendo obtener información sobre los demás acusados y la forma de operar de la asociación, esgrimidas en los recursos de nulidad de Ricardo Velásquez Naranjo, Nicole Velásquez Naranjo, Jenny Naranjo Vega, Sergio Quispe Arellano, Denisse González Sepúlveda y Manuel Almonte Cortés, cabe tener presente que nuevamente se invocan actuaciones policiales que afectan derechos de un tercero.

En efecto, las diligencias efectuadas por funcionarios policiales, que las defensas mencionadas reprochan como ilegales, afectan a Varas García, quien fue la persona que concurrió al recinto policial llevando droga, prestando declaración ante los funcionarios de Carabineros sobre la forma en que la asociación ilícita operaba respecto de la venta de droga, quien no ha formulado reclamo alguno, por lo que este tribunal no logra visualizar su concreta y determinante repercusión en los derechos de los recurrentes, por lo que tampoco



se acreditó una infracción sustancial a una garantía fundamental de los acusados.

32°) Que, también es necesario señalar que la decisión de condena de los acusados no se sustenta en dichas declaraciones únicamente, como se desprende tanto de la lectura de la sentencia como de los arbitrios impetrados por las defensas, por cuanto existen diversos testimonios de funcionarios policiales y declaraciones de peritos que dieron cuenta de lo sucedido y de la responsabilidad de los imputados en los hechos, como también la introducción de prueba documental que también corrobora lo expresado por ellos.

Por lo expresado, no se estableció alguna actuación defectuosa que sirva de fundamento para declarar la nulidad del juicio oral que hubiera influido causalmente en el resultado del juicio, en especial considerando que existían las declaraciones de otros testigos que la defensa pudo contrainterrogar en el juicio oral sin inconvenientes, así como documentos que corroboran lo expresado por ellos y que se refieren a la participación de los acusados, por lo que la infracción descrita carece de trascendencia, al no ser esencial, conforme al artículo 375 del Código Procesal Penal, por lo que la causal fundada en las circunstancias descritas, no podrá prosperar.

33°) Que en lo referente a la infracción de garantías fundado en la intervención del juez presidente del tribunal, al momento que prestaba declaración el perito contable señor Raasch, al consultarle por la situación de la imputada Nicole Velásquez, al que no había hecho referencia el deponente, esgrimida en el arbitrio de nulidad deducido por la defensa de esta acusada, ha de tenerse en consideración que tal como ya ha tenido oportunidad de señalar este máximo tribunal en los ingresos N° 4954-08, N° 1414-09 y N° 4181-09, constituye un



derecho asegurado por la Constitución Política de la República, el que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y a su vez el artículo 19 N° 3, inciso sexto del mismo cuerpo legal, le confiere al legislador la misión de definir siempre las garantías de un procedimiento racional y justo.

En torno a los tópicos que contempla el derecho al debido proceso, no hay discrepancias en aceptar que lo constituye un conjunto de garantías contemplados en la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y las leyes, garantías que se traducen en medios y acciones que se encuentran a disposición de las partes y a través de las cuales se procura que las mismas puedan hacer valer sus pretensiones ante tribunales independientes e imparciales, éstas sean escuchadas, puedan formular reclamos cuando no están conformes con lo resuelto por aquellos, se respeten los procedimientos fijados en la ley y se dicten veredictos motivados o fundados, entre otros.

En el ámbito penal, lo anterior se traduce en que los asuntos criminales deben ser conocidos por los tribunales señalados por la ley con anterioridad a la perpetración del hecho delictivo (juez natural); que otro poder del mismo Estado no puede avocarse a dicha función; y a que el juez al posicionarse ante el conflicto, debe hacerlo de modo que no medie compromiso con los litigantes o el asunto, desde que en todo proceso penal aparece comprometido el interés público de la comunidad en el esclarecimiento de los sucesos y el castigo de los delitos, como también la absolución del inocente.

Coherente con lo anterior, el artículo 1° del Código Procesal Penal desarrolla la garantía en análisis y en su inciso primero dispone que: *“Ninguna*



persona podrá ser condenada o penada, ni sometida a una de las medidas de seguridad establecidas en este Código, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial”.

En consecuencia, la vulneración de esta garantía puede ser reclamada –en cuanto concierne a un Tribunal de Juicio Oral- por el interviniente perjudicado, especialmente a través del recurso de nulidad, sea mediante la causal específica de la letra c) del artículo 374 del Código Procesal Penal o bien, por intermedio de la causal genérica de la letra a) del artículo 373 del mismo texto legal, según corresponda.

De este modo, no cabe duda que la ausencia de imparcialidad, en cuanto ésta es una garantía fundamental reconocida a toda persona, le resta legitimidad a la decisión adoptada por el ente jurisdiccional, pues lo aleja de su rol de tercero ajeno al pleito y genera una lógica desconfianza por parte de los ciudadanos sobre la labor encomendada de hacer justicia.

En Derecho Internacional, a partir de casos emblemáticos conocidos y resueltos por la Corte Europea de Derechos Humanos, ha desarrollado criterios, también adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como aparece de las sentencias pronunciadas en los casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica, de 2 de julio de 2004, Serie C No. 107, párrafo 170 y Palamara Iribarne vs. Chile, de 22 de noviembre de 2005, serie C No. 135, párrafo 146, que, en síntesis, requieren la separación de un juez de la causa sometida a su conocimiento, no sólo cuando en el plano subjetivo tiene algún prejuicio personal, sino también -en el plano objetivo- cuando existan incluso apariencias que puedan suscitar dudas sobre su imparcialidad, pues *“Lo que está en juego es la confianza que deben*



inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática, y sobre todo, en las partes del caso”.

Lo anterior permite afirmar, como ya lo hiciera esta Corte en el Ingreso 4181-09, que todo acusado, en resguardo de su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, se encuentra en condiciones de reclamar la falta de dicha garantía cuando existen circunstancias externas, objetivas, que sugieren sospechas legítimas sobre la existencia de prejuicios del juzgador en la solución del caso que debe resolver, sin que pese sobre el imputado la carga de demostrar que el juez, efectivamente, albergaba en su fuero interno la aspiración de una sentencia perjudicial a sus intereses.

34°) Que, en el caso de autos, la duda sobre la imparcialidad del Tribunal viene dada, conforme lo expresa el recurrente, por la circunstancia de haber excedido el tribunal sus facultades, al consultarle al perito contable señor Raasch sobre la situación de la imputada Nicole Velásquez Naranjo, durante su exposición del peritaje realizado, atendido que no hizo referencia a ella en su declaración que describe el procedimiento y las personas a las que se refería, lo que demuestra una disposición desfavorable a la labor desarrollada por el defensor y, en definitiva, la imputada.

35°) Que, tal explicitación de agravios, sin embargo, en este caso no logra demostrarse. En efecto, no se divisa, a los efectos de la pretendida anulación del fallo, la manera cómo los jueces se habrían alejado de su rol de tercero ajeno al pleito y se habrían apartado de las exigencias de la imparcialidad colocándose, a través de circunstancias externamente apreciables, en una posición que evidencie prejuicios hacia el imputado.



Además, conforme se aprecia del mérito de los antecedentes, el perito estaba dentro de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, que igualmente lo interrogó sobre la situación de cada uno de ellos, incluida Nicole Velásquez, así como el defensor pudo interrogarlo sobre los hechos, realizar las alegaciones que estimó pertinente y proponer tesis alternativas, por lo que no consta que ello haya impedido que la mencionada acusada ejerciera todos los derechos que le confiere la ley durante el juicio oral, tal como se lo garantiza el Código Procesal Penal.

Cabe agregar que, conforme al artículo 292 del Código Procesal Penal, al juez presidente de la sala del tribunal, le corresponde, entre otras facultades, dirigir el debate, como limitar el tiempo del uso de la palabra a las partes que debieren intervenir durante el juicio, fijando límites máximos igualitarios para todas ellas o interrumpiendo a quien hiciere uso manifiestamente abusivo de su facultad, y, en general, las que garanticen la eficaz realización del mismo.

Conforme a ello, según se desprende tanto de la sentencia como del recurso, el tribunal intervino para efectos de aclarar las posibles dudas que podrían generarse durante la declaración del perito señor Raasch al exponer sobre su informe, pudiendo luego el defensor realizar su labor, como se desprende del tenor del recurso, por lo que el reproche carece de significación e influencia sustancial.

36°) Que, en torno a la cual de infracción de garantías esgrimida en los recursos interpuestos por las defensa de Denisse González y Manuel Almonte, consistente en que se incorporaron transcripciones de interceptaciones telefónicas sin cumplir las exigencias contempladas en el Código Procesal Penal,



especialmente en cuando que deben ser realizadas por un ministro de fe, que debe certificar el contenido de ellas, por lo que la esencia de la causal principal radica en que las transcripciones incorporadas en el juicio, se efectuaron sin esas formalidades, aseverando que incluso no existía la identificación de la persona que las realizó.

37°) Que, debe tenerse presente respecto de este capítulo de nulidad invocado por los arbitrio de González Sepúlveda y Almonte Cortés, que la causal de nulidad prevista en la letra a) del Código del Ramo exige probar la influencia sustancial que debe haber tenido la infracción respecto de los derechos o garantías del imputado, requisito que traduce el principio *“no hay nulidad sin perjuicio”*, rector de este arbitrio procesal, que se ve ratificado por el artículo 375, salvo cuando se invoca alguna de las causales previstas en el artículo 374 del Código Procesal Penal. (Mosquera-Maturana, “Los Recursos Procesales”, Editorial Jurídica de Chile, año 2017, cit., p. 338).

Horvitz-López acotan que si el legislador consideró necesario establecer, en ciertos casos causales específicas para excluir al recurrente de la necesidad de demostrar el perjuicio ocasionado por la infracción de derechos o garantías -artículo 374- *“resulta evidente que, en los casos no cubiertos por esas causales específicas, dicho perjuicio se debe demostrar, lo que supone una relación directa entre la infracción cometida y la decisión jurisdiccional adoptada.”* (Derecho Procesal Penal Chileno, T.II, Edit. Jdca. 2005, p. 416).

En la especie se invocó el motivo de nulidad previsto en la letra a) del artículo 373, por lo que los recurrentes no han estado exentos de demostrar el perjuicio sufrido con las contravenciones denunciadas, las que han de ser *“de tal*



entidad que comprometan los aspectos esenciales de la garantía... toda vez que el recurso de nulidad supone la exigencia general del perjuicio aplicable a toda nulidad.” (Horvitz-López, cit. p. 415) El perjuicio reparable sólo con la declaración de nulidad *“existirá cuando la inobservancia de las formas procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento conforme a lo previsto en el art. 159 del CPP.”* (Horvitz-López, cit. p.415).

En tal virtud, los recurrentes debieron satisfacer el requisito en cuestión y convencer a esta Corte que el vicio alegado tiene carácter “sustancial”, es decir, *“que sea trascendente, de mucha importancia o gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvablemente ineficaz frente al derecho constitucional del debido proceso”.* (SCS, Rol 3319-02, RPP, Nro. 4, dicbre. 2002, p. 41) Si bien se afirma que en las transcripciones de las interceptaciones telefónicas incorporadas en el juicio oral no se efectuaron conforme a la ley, puesto que no se indica la persona que actúa como ministro de fe para realizarlas, obteniéndose medios de prueba que luego se incorporaron en el juicio oral, que permitió la condena de los acusados, ello no aparece demostrado en los libelos ni en el desarrollo del juicio, más si se considera que las probanzas obtenidas a través de una eventual vulneración al debido proceso que le asiste a los sentenciados, carecieron de relevancia al momento de lograr convicción condenatoria, dada la existencia de otros antecedentes que permitían precisar tanto la participación de los encartados como su actuar doloso; no siendo de este modo dable inferir que las actuaciones defectuosas denunciadas, hayan tenido verdadera influencia determinante en lo decisorio del fallo.



Por lo expuesto, debe desecharse esa causal invocada por los recursos de nulidad indicados.

Y visto, además, lo prevenido en los artículos 373 letra a), 374 letra e), 377 y 384 del Código Procesal Penal, se declara que **se acogen** los recursos de nulidad deducidos por las defensas de los acusados Nicole Velásquez Naranjo, Jenny Naranjo Vega, Sergio Quispe Arellano, Denisse González Sepúlveda y Manuel Almonte Cortés, en lo que dice relación a la primera causal subsidiaria invocada, consistente en la infracción del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, únicamente en lo que concierne al delito de lavado de activos; y **se rechazan** los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de los condenados Nazira Calderón Rojas, Carolina Varas Catalán, Yeritza Velásquez Naranjo, Ricardo Velásquez Naranjo, Nicole Velásquez Naranjo, Jenny Naranjo Vega, Wilfredo Velásquez Pizarro, Sergio Quispe Arellano, Denisse González Sepúlveda, Manuel Almonte Cortés y Mauricio Núñez Araya, respecto a las restantes causales invocadas, en lo que dice relación a los delitos de asociación ilícita y tráfico de sustancias estupefacientes, y, por lo tanto, se anula parcialmente la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro y el juicio oral que le antecedió, dictada en la causa RUC N° 2000630320-0 y RIT N° 869-2023, por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Antofagasta, solo respecto de los acusados Nicole Velásquez Naranjo, Jenny Naranjo Vega, Sergio Quispe Arellano, Denisse González Sepúlveda y Manuel Almonte Cortés, en lo que dice relación al delito de lavado de activos y se restablece la causa al estado de realizarse un nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado respecto de los referidos imputados y el ilícito mencionado.



Acordado con el voto en contra del Ministro señor Valderrama, quien fue de opinión de rechazar también la causal subsidiaria esgrimida por las defensas de Nicole Velásquez Naranjo, Jenny Naranjo Vega, Sergio Quispe Arellano, Denisse González Sepúlveda y Manuel Almonte Cortés en sus recurso de nulidad, fundada en la causal en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en lo referente al delito de lavado de activos, fundado en las siguientes consideraciones:

1º) Que en lo que atañe a la primera causal subsidiaria impetrada por las defensas de los imputados mencionados en sus arbitrios de nulidad, fundada en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, esta Corte ya ha señalado que toda sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el derecho aplicable. El cumplimiento de la obligación de motivación de la decisión significa elaborar una justificación específica de la opción consistente en tener algunos hechos como probados, sobre la base de los elementos de prueba obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber apunta no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino además a garantizar la actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas del fallo.

La satisfacción de esta carga posibilita la fiscalización de la actividad jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos procesales. Si el tribunal explica las razones de su resolución es posible controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, es el resultado de la arbitrariedad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales



no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones de los jueces, sino que deben ser el corolario de la estimación racional de las probanzas, exteriorizada como una explicación igualmente racional sobre las razones de la decisión de una determinada manera -y no de otra-, explicación que deberá ser comprensible por cualquier tercero, mediante el uso de la razón;

2º) Que, al mismo tiempo, la fijación de los hechos y circunstancias que se tuvieran por probadas, favorables o desfavorables a los acusados, debe ir precedida de la debida valoración que impone el artículo 297 del Código Procesal Penal. Atendiendo a esta norma, el tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso la desestimada, con señalamiento de los medios de prueba, únicos o plurales, por los cuales se dieren por probados los hechos y circunstancias atinentes a la Litis;

3º) Que tal exigencia de fundamentación respecto del delito de lavado de activos en que se le atribuye responsabilidad en calidad de autores a los imputados Nicole Velásquez Naranjo, Jenny Naranjo Vega, Sergio Quispe Arellano, Denisse González Sepúlveda y Manuel Almonte Cortés ha sido debidamente satisfecha por la sentencia que se revisa. En efecto, el fallo extrae conclusiones del análisis de la prueba, como resultado de un proceso valorativo de cada uno de los elementos de convicción rendidos, tanto respecto de los hechos objetivos integrantes del tipo penal atribuido, en especial lo que dice relación a las actividades económicas y financieras realizadas por ellos, así como de las conductas desplegadas por dichos acusados.

En las condiciones expresadas no puede catalogarse como carente de lógica y comprensión el fallo impugnado respecto del ilícito de lavado de activo,



como demanda el artículo 342 del Código Procesal Penal, desde que la sentencia entrega los basamentos que conducen a la decisión alcanzada respecto del mencionado delito, fundado en el análisis singular y conjunto de las probanzas producidas, lo cual surge de la lectura de los considerandos del fallo. Tales consideraciones conducen a una conclusión unívoca, como expresa la sentencia, cuya inteligencia se justifica en virtud de los argumentos explicitados en ella y que no han sido desvirtuados por el recurso, por lo que sólo resta concluir que las impugnaciones formuladas por las defensas dan cuenta de una mera discrepancia con las conclusiones referidas a la configuración del delito de lavado de activos y a la forma de imputar participación a los referidos acusados, juicios que el tribunal sustentó suficientemente como se advierte de los motivos trigésimo quinto en adelante, por lo que las imputaciones relativas a una presunta falencia en el razonamiento no será admitida.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Tavolari y de la disidencia, su autor.

Rol N° 25.463-2024.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Cristina Gajardo H., y las Abogadas Integrantes Sras. Pía Tavolari G. y Andrea Ruiz R. No firma el Ministro Sr. Valderrama, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con licencia médica.





En Santiago, a once de septiembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

